



**Consejo Económico
y Social**

Distr.
LIMITADA

E/CN.4/2001/L.11/Add.7
25 de abril de 2001

ESPAÑOL
Original: INGLÉS

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS
57º período de sesiones
Tema 21 b) del programa

INFORME DE LA COMISIÓN AL CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL
SOBRE LA LABOR REALIZADA EN SU 57º PERÍODO DE SESIONES

Proyecto de informe de la Comisión

Relator: Sr. Imtiaz HUSSAIN (Pakistán)

Adición

ÍNDICE*

Página

II. RESOLUCIONES Y DECISIONES APROBADAS POR LA COMISIÓN
EN SU 57º PERÍODO DE SESIONES

A. Resoluciones

2001/67. Fortalecimiento de la cooperación internacional en la esfera de los derechos humanos.....	3
2001/68. Cuestión de la pena capital.....	5

* El documento E/CN.4/2001/L.10 y sus adiciones contendrán los capítulos del informe relativos a la organización del período de sesiones y a los diversos temas del programa. Las resoluciones y decisiones aprobadas por la Comisión, así como los proyectos de resolución y decisión y otras cuestiones sometidas al Consejo Económico y Social, figurarán en el documento E/CN.4/2001/L.11 y sus adiciones.

ÍNDICE (continuación)

	<u>Página</u>
II. A. <u>Resoluciones (continuación)</u>	
2001/69. Promoción del derecho de los pueblos a la paz.....	9
2001/70. Impunidad	11
2001/71. Los derechos humanos y la bioética.....	16
2001/72. La función del buen gobierno en la promoción de los derechos humanos	20
2001/73. Los derechos humanos y la solidaridad internacional.....	22
2001/74. Secuestro de niños en Uganda septentrional.....	24
2001/75. Derechos del niño.....	27
2001/76. Distribución geográfica equitativa de los miembros de los órganos creados en virtud de tratados de derechos humanos	44
2001/77. Cooperación regional para la promoción y protección de los derechos humanos en la región de Asia y el Pacífico.....	46
2001/78. Composición del personal de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.....	51
2001/79. Arreglos regionales para la promoción y protección de los derechos humanos	56
2001/80. Instituciones nacionales de promoción y protección de los derechos humanos.....	60
2001/81. Asistencia a Somalia en materia de derechos humanos	64
2001/82. Situación de los derechos humanos en Camboya	71

2001/67. Fortalecimiento de la cooperación internacional
en la esfera de los derechos humanos

La Comisión de Derechos Humanos,

Teniendo presente que entre los propósitos de las Naciones Unidas figuran los de fomentar entre las naciones relaciones de amistad basadas en el respeto del principio de la igualdad de derechos y la libre determinación de los pueblos y adoptar otras medidas adecuadas para fortalecer la paz universal y realizar la cooperación internacional en la solución de problemas internacionales de carácter económico, social, cultural o humanitario y en la promoción y estímulo del respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos, sin distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión,

Recordando su resolución 2000/70, de 26 de abril de 2000, relativa al fortalecimiento de la cooperación internacional en la esfera de los derechos humanos, la resolución 54/181 de la Asamblea General, de 17 de diciembre de 1999, y la resolución 54/113 de la Asamblea, de 10 de diciembre de 1999, relativa al Año de las Naciones Unidas del Diálogo entre Civilizaciones,

Reafirmando su determinación de promover y fortalecer una auténtica cooperación internacional en la esfera de los derechos humanos entre los Estados Miembros, como se establece en la Carta de las Naciones Unidas, en particular el párrafo 3 del Artículo 1, así como en las disposiciones pertinentes de la Declaración y Programa de Acción de Viena, que aprobó la Conferencia Mundial de Derechos Humanos el 25 de junio de 1993,

Haciendo hincapié en que el fortalecimiento de la cooperación internacional en la esfera de los derechos humanos es esencial para el logro pleno de los propósitos de las Naciones Unidas, entre ellos, la promoción y protección efectivas de todos los derechos humanos,

Reafirmando que el diálogo entre las religiones, culturas y civilizaciones, en particular en la esfera de los derechos humanos, podría coadyuvar en gran medida al fortalecimiento de la cooperación internacional en esta esfera,

Destacando la necesidad de seguir avanzando en la promoción y el estímulo del respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales, en particular mediante la cooperación internacional,

Subrayando que el entendimiento mutuo, el diálogo, la cooperación, la transparencia y las medidas de fomento de la confianza son elementos importantes en todas las actividades de promoción y protección de los derechos humanos,

Recordando la resolución 2000/22, aprobada el 18 de agosto de 2000 por la Subcomisión de Promoción y Protección de los Derechos Humanos en su 52º período de sesiones, titulada "Promoción del diálogo sobre cuestiones de derechos humanos", y tomando nota de que la Subcomisión seguirá examinando la cuestión del diálogo entre civilizaciones en su 53º período de sesiones,

1. Reafirma que uno de los propósitos de las Naciones Unidas, a la par que la responsabilidad de todos los Estados Miembros, consiste en promover, proteger y alentar el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales, en particular mediante la cooperación internacional;
2. Considera que la cooperación internacional en esta esfera, de conformidad con los propósitos y principios enunciados en la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional, deberá aportar una contribución efectiva y práctica a la urgente tarea de impedir las violaciones de los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos;
3. Reafirma que la promoción, la protección y la plena realización de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales deberán regirse por los principios de universalidad, no selectividad, objetividad y transparencia, de forma compatible con los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas;
4. Insta a los Estados Miembros, los organismos especializados y las organizaciones intergubernamentales a que sigan manteniendo un diálogo constructivo y celebrando consultas a fin de comprender mejor y promover y proteger en mayor medida todos los derechos humanos y libertades fundamentales, y alienta a las organizaciones no gubernamentales a que contribuyan activamente en esa labor;
5. Invita a los Estados y a los mecanismos y procedimientos pertinentes de derechos humanos de las Naciones Unidas a que sigan prestando atención a la importancia de la

cooperación mutua, la comprensión y el diálogo para la promoción y protección de los derechos humanos;

6. Celebra la decisión de la Asamblea General de proclamar el año 2001 Año de las Naciones Unidas del Diálogo entre Civilizaciones, y reafirma que el diálogo entre las culturas y civilizaciones facilita la promoción de una cultura de tolerancia y respeto de la diversidad y, a ese respecto, toma nota de la celebración, en Teherán el 17 de febrero de 2001, de la Conferencia Asiática sobre Diálogo entre Civilizaciones, así como de la celebración, en Viena en diciembre de 2000, de la Primera Reunión del Grupo de Personalidades;

7. Decide seguir examinando esta cuestión, con carácter prioritario, en su 58º período de sesiones.

78ª sesión,
25 de abril de 2001.
[Aprobada sin votación. Véase cap. XVII.]

2001/68. Cuestión de la pena capital

La Comisión de Derechos Humanos,

Recordando el artículo 3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que afirma el derecho de todos los individuos a la vida, el artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el artículo 6 y el apartado a) del artículo 37 de la Convención sobre los Derechos del Niño,

Recordando asimismo las resoluciones de la Asamblea General 2857 (XXVI), de 20 de diciembre de 1971, y 32/61, de 8 de diciembre de 1977, relativas a la pena capital, así como la resolución 44/128, de 15 de diciembre de 1989, en la que la Asamblea aprobó y abrió a la firma, ratificación y adhesión el Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, destinado a abolir la pena de muerte,

Recordando además las resoluciones del Consejo Económico y Social 1574 (L) de 20 de mayo de 1971, 1745 (LIV) de 16 de mayo de 1973, 1930 (LVIII) de 6 de mayo de 1975, 1984/50 de 25 de mayo de 1984, 1985/33 de 29 de mayo de 1985, 1989/64

de 24 de mayo de 1989, 1990/29 de 24 de mayo de 1990, 1990/51 de 24 de julio de 1990 y 1996/15 de 23 de julio de 1996,

Recordando sus resoluciones 1998/8, de 3 de abril de 1998, 1999/61, de 28 de abril de 1999 y 2000/65, de 26 de abril de 2000, en las que manifestaba su convicción de que la abolición de la pena de muerte contribuye a realzar la dignidad humana y el desarrollo progresivo de los derechos humanos,

Acogiendo con beneplácito la exclusión de la pena capital de las penas que están autorizados a imponer el Tribunal Internacional para la ex Yugoslavia, el Tribunal Internacional para Rwanda y la Corte Penal Internacional,

Celebrando la abolición de la pena capital desde el último período de sesiones de la Comisión, en algunos Estados, en particular los que han abolido la pena capital respecto de todos los delitos,

Elogiando a los Estados que se han adherido en fecha reciente al Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, destinado a abolir la pena de muerte,

Celebrando las recientes firmas del Segundo Protocolo Facultativo por algunos Estados,

Acogiendo con beneplácito el hecho de que muchos países, si bien mantienen la pena capital en su legislación penal, suspenden las ejecuciones,

Remitiéndose al informe de la Relatora Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias (E/CN.4/2001/9), por lo que se refiere a las Salvaguardias para garantizar la protección de los derechos de los condenados a la pena de muerte, establecidas en el anexo de la resolución 1984/50 del Consejo Económico y Social,

Profundamente preocupada porque varios países imponen la pena de muerte haciendo caso omiso de las limitaciones previstas en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención sobre los Derechos del Niño,

Preocupada porque varios países, al imponer la pena de muerte, no tienen en cuenta las Salvaguardias para garantizar la protección de los derechos de los condenados a la pena de muerte,

1. Acoge con beneplácito el sexto informe quinquenal del Secretario General sobre la pena capital y la aplicación de las Salvaguardias para garantizar la protección de los derechos de los condenados a la pena de muerte, presentado de conformidad con la resolución 1995/57 del Consejo Económico y Social, de 28 de julio de 1995 (E/2000/3) y aguarda con interés la recepción del suplemento anual sobre los cambios en las leyes y las prácticas relativas a la pena de muerte en todo el mundo, de conformidad con lo solicitado en la resolución 2000/65 de la Comisión;

2. Celebra asimismo la resolución 2000/17 de la Subcomisión de Promoción y Protección de los Derechos Humanos, de 17 de agosto de 2000;

3. Exhorta a todos los Estados Partes en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que todavía no se hayan adherido al Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, destinado a abolir la pena de muerte, ni lo hayan ratificado, a que estudien la posibilidad de hacerlo;

4. Insta a todos los Estados que todavía mantienen la pena de muerte a:

a) Cumplir plenamente las obligaciones contraídas en virtud del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención sobre los Derechos del Niño, especialmente la obligación de no imponer la pena capital salvo en el caso de los más graves delitos y sólo tras la emisión de un fallo definitivo por un tribunal competente, imparcial e independiente, de no imponerla por delitos cometidos por menores de 18 años de edad, de excluir de esa pena a las mujeres embarazadas y de asegurar el derecho a un juicio justo y a solicitar el indulto o la conmutación de la sentencia;

b) Velar por que el concepto de "más graves delitos" se limite a los delitos intencionales con consecuencias fatales o extremadamente graves y por que no se imponga la pena de muerte por delitos financieros no violentos o por la expresión no violenta de convicciones o la práctica religiosa;

c) No formular nuevas reservas en relación con el artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que puedan ser contrarias al objetivo y los propósitos del Pacto y a retirar las reservas ya formuladas, en vista de que en el artículo 6 del Pacto se consagran las normas mínimas para la protección del derecho a la vida y las normas generalmente aceptadas en esta esfera;

d) Observar las Salvaguardias para garantizar la protección de los derechos de los condenados a la pena de muerte y a cumplir plenamente sus obligaciones internacionales, en particular las contraídas en virtud de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares;

e) No imponer la pena capital, ni ejecutar, a ninguna persona que sufra una forma de trastorno mental;

f) No ejecutar a ninguna persona mientras esté pendiente cualquier otro procedimiento jurídico conexo en el plano internacional o nacional;

5. Exhorta a los Estados que todavía mantienen la pena de muerte a que:

a) Limiten progresivamente el número de delitos por los que se puede imponer esa pena;

b) Suspendan las ejecuciones, con miras a abolir completamente la pena de muerte;

c) Pongan a disposición de la población la información relativa a la imposición de la pena de muerte;

6. Pide a los Estados que hayan recibido una solicitud de extradición por un delito punible con la pena capital a reservarse expresamente el derecho a denegar la extradición a menos que las autoridades competentes del Estado solicitante den seguridades de que no se ejecutará la pena capital;

7. Pide al Secretario General que, en consulta con los gobiernos, los organismos especializados y las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales, siga presentando a la Comisión, en su 58º período de sesiones, un informe sobre los cambios en las leyes y las prácticas relativas a la pena de muerte en todo el mundo, como suplemento anual de

su informe quinquenal sobre la pena capital y la aplicación de las Salvaguardias para garantizar la protección de los derechos de los condenados a la pena de muerte prestando especial atención a la imposición de la pena de muerte a personas que, en el momento de cometer el delito, tenían menos de 18 años;

8. Decide seguir examinando esta cuestión en su 58º período de sesiones en relación con el mismo tema del programa.

78ª sesión,
25 de abril de 2001.
[Aprobada en votación nominal por 27 votos
contra 18 y 7 abstenciones. Véase cap. XVII.]

2001/69. Promoción del derecho de los pueblos a la paz

La Comisión de Derechos Humanos,

Teniendo presentes los principios fundamentales del derecho internacional establecidos en la Carta de las Naciones Unidas,

Reafirmando la importancia de velar por el respeto de los principios de la soberanía, la integridad territorial y la independencia política de los Estados y de la no intervención en asuntos que son esencialmente de la jurisdicción interna de los Estados, de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional,

Reafirmando también que todos los pueblos tienen el derecho a la libre determinación, en virtud del cual establecen libremente su condición política y proveen asimismo a su desarrollo económico, social y cultural,

Reafirmando asimismo que la sujeción de pueblos a una subyugación, dominación y explotación extranjeras constituye una denegación de los derechos humanos fundamentales, es contraria a la Carta de las Naciones Unidas y compromete la causa de la paz y de la cooperación mundiales,

Recordando que toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en la Declaración Universal de Derechos Humanos se hagan plenamente efectivos,

Reafirmando que hay una estrecha relación entre el desarme y el desarrollo, que los progresos en la esfera del desarme promoverían considerablemente los progresos en la esfera del desarrollo y que los recursos liberados con las medidas de desarme deberían destinarse al desarrollo económico y social y al bienestar de todos los pueblos, y, en particular, de los países en desarrollo,

Recordando la resolución 1996/16 de la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías,

Alarmada por la amenaza que plantea para la supervivencia misma de la humanidad la existencia de armas nucleares y la persistente carrera de armamentos, y recordando la devastación que han infligido todas las guerras,

Convencida de que una vida sin guerras constituye en el plano internacional el requisito previo primordial para el bienestar material, el florecimiento y el progreso de los países y la realización total de los derechos y las libertades fundamentales del hombre proclamadas por las Naciones Unidas,

1. Reafirma la solemne proclamación de que los pueblos de nuestro planeta tienen el derecho sagrado a la paz;
2. Declara solemnemente que proteger el derecho de los pueblos a la paz y fomentar su realización es una obligación fundamental de todo Estado;
3. Subraya que para asegurar el ejercicio del derecho de los pueblos a la paz se requiere que la política de los Estados esté orientada hacia la eliminación de la amenaza de la guerra, especialmente de la guerra nuclear, a la renuncia al uso de la fuerza en las relaciones internacionales y al arreglo de las controversias internacionales por medios pacíficos de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas;

4. Afirma que todos los Estados deben promover el establecimiento, mantenimiento y fortalecimiento de la paz y la seguridad internacionales y, con ese fin, deben hacer cuanto esté en su poder por lograr el desarme general y completo bajo un control internacional eficaz, así como lograr que los recursos liberados con medidas efectivas de desarme se utilicen para el desarrollo global, en particular de los países en desarrollo;

5. Insta a todos los Estados a que se abstengan de utilizar armas que tengan efectos indiscriminados en la salud humana, el medio ambiente y el bienestar económico y social;

6. Expresa su preocupación por el peligro real que supone el emplazamiento de armas en el espacio ultraterrestre y por el riesgo de que la carrera de armamentos mundial adquiriera nuevo impulso;

7. Insta a todos los Estados a que se abstengan de adoptar medidas que alienten el regreso a la carrera de armamentos, teniendo presentes todas las consecuencias predecibles para la paz y la seguridad mundiales, para el desarrollo y para la plena realización de todos los derechos humanos;

8. Decide seguir examinando esta cuestión en su 58º período de sesiones, en relación con el mismo tema del programa.

78ª sesión,
25 de abril de 2001.

[Aprobada en votación nominal por 29 votos
contra 16 y 7 abstenciones. Véase el cap. XVII.]

2001/70. Impunidad

La Comisión de Derechos Humanos,

Guiada por la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de Derechos Humanos, los Pactos Internacionales de Derechos Humanos y otros instrumentos de derechos humanos pertinentes, así como por la Declaración y Programa de Acción de Viena,

Recordando todas las resoluciones y decisiones anteriores de la Comisión y de la Subcomisión de Promoción y Protección de los Derechos Humanos sobre la impunidad, así como el párrafo 91 de la parte II de la Declaración y Programa de Acción de Viena,

Recordando también la universalidad, interdependencia e indivisibilidad de todos los derechos humanos civiles, culturales, económicos, políticos y sociales,

Teniendo presentes todos los informes anteriores de las Naciones Unidas sobre la cuestión de la impunidad,

Tomando nota del informe del Secretario General sobre la impunidad (E/CN.4/2001/88 y Corr.1),

Tomando nota también de la resolución 2000/24 de la Subcomisión sobre el papel de la competencia universal y extraterritorial en las medidas de prevención de la impunidad,

Reconociendo la importancia de combatir la impunidad respecto de todas las violaciones de los derechos humanos que constituyan delitos,

Reconociendo que el establecimiento de la Corte Penal Internacional es una importante contribución para poner fin a la cultura de la impunidad y recordando el informe del Secretario General titulado "Nosotros los pueblos: la función de las Naciones Unidas en el siglo XXI" (A/54/2000), en el que se reconoce esa contribución,

Reconociendo la labor de los Tribunales Penales Internacionales para la ex Yugoslavia y para Rwanda,

Acogiendo con satisfacción el hecho de que un gran número de Estados ya han firmado o ratificado el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional,

Acogiendo también con satisfacción las medidas de lucha contra la impunidad y de fomento de la responsabilidad, y las iniciativas encaminadas a establecer mecanismos judiciales especiales que actualmente se examinan en algunos países en cooperación con las Naciones Unidas y de conformidad con las normas internacionales de justicia, equidad y debidas garantías procesales, con el apoyo internacional,

Convencida de que la práctica y la expectativa de la impunidad respecto de las violaciones de los derechos humanos o del derecho internacional humanitario alientan esas violaciones y son uno de los obstáculos fundamentales para la observancia de las normas de derechos humanos y del derecho internacional humanitario y para la plena aplicación de los instrumentos internacionales de derechos humanos y de derecho humanitario,

Convencida además de que la denuncia de las violaciones de los derechos humanos, la entrega a la justicia de sus autores, incluidos sus cómplices y colaboradores, la obtención de justicia para las víctimas, así como el mantenimiento de archivos históricos de esas violaciones y la restitución de la dignidad de las víctimas mediante el reconocimiento y la conmemoración de sus padecimientos constituirán una referencia para las sociedades futuras, y de que todo ello es parte integrante de la promoción y el ejercicio efectivo de los derechos humanos y las libertades fundamentales y de la prevención de futuras violaciones,

Reconociendo que la responsabilidad de los autores, incluidos los cómplices, de violaciones graves de los derechos humanos es uno de los elementos esenciales de toda reparación eficaz para las víctimas de violaciones de los derechos humanos y un factor clave para conseguir un sistema de justicia justo y equitativo y, en definitiva, la reconciliación y la estabilidad en un Estado,

Acogiendo con agrado el establecimiento, por varios Estados en los que han ocurrido graves violaciones de los derechos humanos en el pasado, de mecanismos para denunciar esas violaciones, como las comisiones investigadoras o las comisiones encargadas de averiguar la verdad y fomentar la reconciliación,

Consciente de que el fenómeno de la impunidad afecta a todas las esferas de la sociedad,

Convencida de la necesidad de que los gobiernos luchen contra la impunidad investigando los atropellos pasados o presentes y tomando medidas para impedir que se repitan,

1. Subraya la importancia de luchar contra la impunidad para prevenir las violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, e insta a los Estados a que presten la debida atención a la cuestión de la impunidad respecto de las violaciones de los

derechos humanos y del derecho internacional humanitario, en particular las cometidas contra mujeres y niños, y a que adopten medidas apropiadas para hacer frente a esa importante cuestión;

2. Subraya la importancia de adoptar todas las medidas posibles y necesarias para que respondan ante la justicia los autores, incluidos los cómplices, de violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, e insta a los Estados a que actúen respetando las debidas garantías procesales;

3. Acoge con satisfacción, al respecto, los progresos realizados en la lucha contra la impunidad, incluido el reconocimiento del principio de complementariedad en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional;

4. Reconoce la importancia histórica de la aprobación del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y exhorta a todos los Estados a que estudien la posibilidad de ratificarlo o de adherirse a él;

5. Exhorta a los Estados a que continúen participando activamente en la Comisión Preparatoria de la Corte Penal Internacional;

6. Exhorta a los Estados y a la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos a que consideren la posibilidad de prestar a los Estados que lo soliciten asistencia y cooperación concreta y práctica con miras a alcanzar los objetivos establecidos en la presente resolución;

7. Exhorta a los Estados a que sigan apoyando la labor de los Tribunales Penales Internacionales para la ex Yugoslavia y para Rwanda, y estudien maneras de apoyar las iniciativas encaminadas a establecer mecanismos judiciales especiales que actualmente se examinan en algunos países en cooperación con las Naciones Unidas;

8. Reconoce que para las víctimas de violaciones de los derechos humanos el conocimiento público de su sufrimiento y de la verdad acerca de los autores de esas violaciones, incluidos los cómplices, es un paso esencial hacia la rehabilitación y la reconciliación, e insta a los Estados a que redoblen sus esfuerzos para ofrecer a las víctimas de violaciones de los derechos humanos un proceso justo y equitativo mediante el cual puedan investigarse y hacerse públicas esas violaciones, y a que alienten a las víctimas a participar en dicho proceso;

9. Acoge con beneplácito a este respecto la publicación en algunos Estados de los informes de comisiones de averiguación de la verdad y reconciliación establecidas por esos países para investigar las violaciones de los derechos humanos que se han producido allí en el pasado, y alienta a los otros Estados en los que se hayan producido violaciones graves de los derechos humanos a establecer mecanismos adecuados para denunciar esas violaciones;

10. Pide al Secretario General que recabe las opiniones de los gobiernos y de las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales sobre la cuestión del posible nombramiento de un experto independiente encargado de examinar todos los aspectos de la cuestión de la impunidad de los autores de violaciones de los derechos humanos, con miras a adoptar una decisión al respecto en el 58º período de sesiones de la Comisión;

11. Pide también al Secretario General que invite de nuevo a los Estados a proporcionar información sobre las medidas legislativas, administrativas o de otra índole que hayan adoptado para combatir la impunidad respecto de las violaciones de los derechos humanos cometidas en su territorio y sobre los recursos de que puedan disponer las víctimas de esas violaciones;

12. Pide además al Secretario General que reúna la información y las observaciones recibidas en cumplimiento de la presente resolución y que someta un informe al respecto a la Comisión en su 58º período de sesiones;

13. Invita a los relatores especiales y demás mecanismos de la Comisión a que sigan considerando debidamente la cuestión de la impunidad en el cumplimiento de sus mandatos;

14. Decide seguir examinando esta cuestión en su 58º período de sesiones, en relación con el tema del programa titulado "Promoción y protección de los derechos humanos".

78ª sesión,
25 de abril de 2001.
[Aprobada en votación nominal por 39 votos contra
ninguno y 13 abstenciones. Véase cap. XVII.]

2001/71. Los derechos humanos y la bioética

La Comisión de Derechos Humanos,

Recordando que, según la Declaración Universal de Derechos Humanos, la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana,

Recordando asimismo el ideal del ser humano libre, liberado del temor y de la miseria, reconocido por la Declaración Universal de Derechos Humanos y los Pactos internacionales de derechos humanos,

Deseosa de preservar la dignidad y la integridad del ser humano,

Recordando el derecho de toda persona, reconocido por el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, a gozar de los beneficios del progreso científico y de sus aplicaciones,

Reconociendo, de conformidad con el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, los beneficios que pueden obtenerse con el fomento y el desarrollo de la cooperación y de los contactos internacionales en el campo de la ciencia,

Recordando la disposición del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos según la cual nadie será sometido sin su libre consentimiento a experimentos médicos o científicos,

Recordando también los Principios de ética médica aplicables a la función del personal de salud, especialmente los médicos, en la protección de los presos y detenidos contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, aprobados por la Asamblea General en su resolución 37/194, de 18 de diciembre de 1982,

Subrayando que, con arreglo a la Convención sobre los Derechos del Niño, los Estados Partes tienen la obligación de proteger al niño contra toda forma de violencia,

Consciente de que la rápida evolución de las ciencias de la vida abre inmensas perspectivas de mejoramiento de la salud de las personas y de toda la humanidad, pero también de que ciertas prácticas pueden poner en peligro la integridad y la dignidad de las personas,

Deseosa, en consecuencia, de asegurar que los progresos científicos beneficien a las personas y se desarrollen respetando los derechos humanos fundamentales,

Refiriéndose a la Declaración Universal sobre el Genoma Humano y los Derechos Humanos aprobada por la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura el 11 de noviembre de 1997, y a la resolución 53/152 de la Asamblea General, de 9 de diciembre de 1998, en que la Asamblea hizo suya la Declaración,

Refiriéndose asimismo a la resolución 29 C/17 sobre la aplicación de la Declaración, aprobada por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura y recordando que, de conformidad con esa resolución, los Estados miembros se comprometen a comunicar al Director General toda la información pertinente sobre las medidas que hayan adoptado para aplicar los principios enunciados en la Declaración,

Recordando que en el artículo 1 de la Declaración se enuncia el principio de que el genoma humano es la base de la unidad fundamental de todos los miembros de la familia humana y del reconocimiento de su dignidad y diversidad intrínsecas,

Recordando asimismo que en el artículo 10 de la Declaración se afirma que ninguna investigación relativa al genoma humano ni sus aplicaciones, en particular en las esferas de la biología, la genética y la medicina, podrán prevalecer sobre el respeto de los derechos humanos, de las libertades fundamentales y de la dignidad humana de los individuos o, si procede, de grupos humanos,

Recordando además la decisión adoptada el 7 de mayo de 1998, por la cual el Consejo Ejecutivo de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura creó el Comité Internacional de Bioética, con el objeto de promover el estudio de los problemas éticos y jurídicos que plantean las investigaciones en materia de ciencias de la vida, formular recomendaciones a la Conferencia General y prestar asesoramiento en cuanto al seguimiento de la Declaración, identificando las prácticas que podrían ser contrarias a la dignidad humana,

Recordando por último sus resoluciones 1991/45, de 5 de marzo de 1991, 1993/91, de 10 de marzo de 1993, 1997/71, de 16 de abril de 1997, y 1999/63, de 28 de abril de 1999,

Refiriéndose a la Declaración del Milenio, de las Naciones Unidas, en la que se decide garantizar el libre acceso a la información sobre la secuencia del genoma humano,

Refiriéndose asimismo a la resolución 1997/42 de la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías, de fecha 28 de agosto de 1997, sobre esta cuestión,

Recordando la aprobación por el Comité de Ministros del Consejo de Europa, el 4 de abril de 1997, de la Convención para la protección de los derechos humanos y la dignidad del ser humano respecto de las aplicaciones de la biología y la medicina,

Convencida de la necesidad de desarrollar en los planos nacional e internacional una ética de las ciencias de la vida, y reconociendo la necesidad de formular normas y establecer una cooperación a nivel internacional a fin de asegurar que toda la humanidad saque provecho de la utilización de dichas ciencias e impedir que se destinen a fines ajenos a su bien,

1. Toma nota con satisfacción del informe del Secretario General (E/CN.4/2000/93);
2. Expresa su reconocimiento a los gobiernos que han respondido a la solicitud de información formulada por la Comisión de Derechos Humanos en su resolución 1999/63, de 28 de abril de 1999, e invita a los gobiernos que aún no hayan respondido a hacerlo;
3. Reafirma la importancia de recibir respuestas de las organizaciones y los organismos especializados de las Naciones Unidas e invita a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, a la Organización Mundial de la Salud y a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, así como a los demás órganos y organismos especializados pertinentes de las Naciones Unidas a que informen al Secretario General de las actividades realizadas en sus respectivos sectores para velar por que se tengan en cuenta los principios enunciados por la Declaración Universal sobre el Genoma Humano y los Derechos Humanos;
4. Invita al Secretario General a formular, a partir de esas aportaciones, para su examen por la Asamblea General en su quincuagésimo sexto período de sesiones, propuestas sobre los medios de asegurar una coordinación satisfactoria de las actividades y la reflexión en materia de bioética en todo el sistema de las Naciones Unidas y a considerar la posibilidad de establecer un

grupo de trabajo de expertos independientes procedentes de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la Organización Mundial de la Salud y la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, entre otros organismos, que se encargaría de estudiar, en particular, las posibilidades de seguimiento de la Declaración Universal sobre el Genoma Humano y los Derechos Humanos y de informar al Secretario General en el plazo que él fije;

5. Invita a la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos a prestar toda la atención necesaria a esta cuestión, dentro de su esfera de competencia;

6. Señala a la atención de los gobiernos tanto la importancia de las investigaciones sobre el genoma humano y de sus aplicaciones para el mejoramiento de la salud de las personas y de la humanidad entera, como la exigencia de que se salvaguarden los derechos de la persona y su dignidad, así como su identidad y su unidad, y la necesidad de proteger la confidencialidad de los datos genéticos de carácter nominativo;

7. Invita a los gobiernos a que prevean la creación de comités de ética independientes, pluridisciplinarios y pluralistas, encargados de evaluar, especialmente en cooperación con el Comité Internacional de Bioética de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, las cuestiones éticas, sociales y humanas suscitadas por las investigaciones biomédicas con seres humanos y, en particular, las referentes al genoma humano y sus aplicaciones, y les invita además a que pongan en conocimiento del Secretario General la creación de tales órganos a fin de promover el intercambio de experiencias entre tales instituciones;

8. Pide nuevamente a la Subcomisión de Promoción y Protección de los Derechos Humanos que estudie la contribución que puede aportar al estudio iniciado por el Comité Internacional de Bioética sobre el seguimiento de la Declaración Universal sobre el Genoma Humano y los Derechos Humanos y que informe al respecto a la Comisión en su 59º período de sesiones;

9. Pide al Secretario General que elabore un informe basado en esas contribuciones para que la Comisión lo examine en su 59º período de sesiones.

78ª sesión,
25 de abril de 2001.
[Aprobada sin votación. Véase cap. XVII.]

2001/72. La función del buen gobierno en la promoción de los derechos humanos

La Comisión de Derechos Humanos,

Guiada por la Declaración Universal de Derechos Humanos como medida común de los logros de todos los pueblos y de todas las naciones, que se aplica a todas las personas y a todos los órganos de la sociedad, y también por la Declaración y Programa de Acción de Viena (A/CONF.157/23), que afirmaron que todos los derechos humanos son universales, indivisibles, interdependientes y están relacionados entre sí,

Reconociendo la importancia de un entorno propicio, tanto a nivel nacional como internacional, para el pleno disfrute de todos los derechos humanos,

Destacando que el fortalecimiento del buen gobierno a nivel nacional, inclusive mediante la creación de instituciones eficaces y responsables para promover el crecimiento y el desarrollo humano sostenible, es un proceso continuo para todos los gobiernos, cualquiera que sea el nivel de desarrollo de los países de que se trate,

Tomando nota de que cada vez se reconoce más la importancia del buen gobierno en la promoción de los derechos humanos, y en particular del reconocimiento de esa importancia en la Declaración del Milenio, de las Naciones Unidas, aprobada por Jefes de Estado y de Gobierno en la Cumbre del Milenio de las Naciones Unidas,

Tomando nota asimismo de que las prácticas de buen gobierno varían necesariamente según las circunstancias y necesidades particulares de las diferentes sociedades, y que la responsabilidad de determinar y aplicar esas prácticas, basadas en la transparencia y la responsabilidad, y de crear y mantener un entorno propicio conducente al disfrute de todos los derechos humanos a nivel nacional incumbe al Estado interesado,

Afirmando la necesidad de aumentar la cooperación a nivel internacional entre los Estados y por medio del sistema de las Naciones Unidas, a fin de que los Estados que necesiten aportaciones externas para mejorar las prácticas de buen gobierno tengan acceso a la información y a los recursos necesarios, si lo requieren,

Reconociendo la necesidad de un examen más detenido de la función que el buen gobierno desempeña en la promoción de los derechos humanos y de la relación entre las prácticas de buen gobierno y la promoción y protección de todos los derechos humanos en todos los países,

1. Reconoce que una gestión transparente, responsable, consecuente y participativa, sensible a las necesidades y aspiraciones de la población, es el fundamento en el que se basa el buen gobierno, y que ese fundamento es condición indispensable para la promoción de los derechos humanos, inclusive el derecho al desarrollo;
2. Destaca, en este contexto, la necesidad de promover enfoques basados en la asociación con respecto a la cooperación internacional para el desarrollo y de velar por que los enfoques normativos del buen gobierno no obstaculicen esa cooperación;
3. Acoge complacida la aportación por algunos Estados, en respuesta a la invitación formulada por la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos de conformidad con el párrafo 3 de la resolución 2000/64 de la Comisión, de 26 de abril de 2000, de ejemplos prácticos de actividades que han sido eficaces para fortalecer las prácticas de buen gobierno con objeto de promover los derechos humanos a nivel nacional, incluidas las actividades realizadas en el marco de la cooperación para el desarrollo entre los Estados, a fin de que se incorporen en una recopilación de ideas y prácticas de carácter indicativo que podrían consultar los Estados interesados cuando lo necesiten, y pide a la Alta Comisionada que reitere esa invitación a los Estados y que la haga extensiva a los órganos de las Naciones Unidas y a otros organismos internacionales pertinentes;
4. Invita a la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos a que haga uso en su trabajo, cuando sea apropiado y procedente, del material que se haya proporcionado en respuesta a las invitaciones formuladas de conformidad con el párrafo 3 de la presente resolución y con el párrafo 3 de la resolución 2000/64, y que informe a la Comisión de la utilidad del material a este respecto;

5. Decide seguir examinando, en su 58º período de sesiones, la cuestión de la función del buen gobierno en la promoción de los derechos humanos en relación con el mismo tema del programa.

78ª sesión,
25 de abril de 2001.
[Aprobada sin votación. Véase cap. XVII.]

2001/73. Los derechos humanos y la solidaridad internacional

La Comisión de Derechos Humanos,

Subrayando que los procesos de promoción y protección de los derechos humanos deben desarrollarse de conformidad con los Propósitos y Principios de la Carta de las Naciones Unidas y con el derecho internacional,

Reafirmando que la democracia, el desarrollo y el respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales son interdependientes y se refuerzan mutuamente,

Recordando que en la Conferencia Mundial de Derechos Humanos los Estados se comprometieron a cooperar mutuamente para lograr el desarrollo y eliminar los obstáculos al desarrollo, y subrayaron que la comunidad internacional debía propiciar una cooperación internacional eficaz para la realización del derecho al desarrollo y la eliminación de los obstáculos al desarrollo,

Reafirmando que en el artículo 4 de la Declaración sobre el derecho al desarrollo se dice que se requiere una acción sostenida para promover un desarrollo más rápido de los países en desarrollo y, que, como complemento de los esfuerzos de los países en desarrollo, es indispensable una cooperación internacional eficaz para proporcionar a esos países los medios y las facilidades adecuados para fomentar su desarrollo global,

Teniendo en cuenta que en el artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales cada uno de los Estados Partes en el Pacto se compromete a adoptar medidas, tanto por separado como mediante la asistencia y la cooperación internacionales, especialmente económicas y técnicas, hasta el máximo de los recursos de que disponga, para

lograr progresivamente, por todos los medios apropiados, inclusive en particular la adopción de medidas legislativas, la plena efectividad de los derechos reconocidos en el Pacto,

Expresando su preocupación por que el inmenso potencial de generación de beneficios resultante del proceso de mundialización e interdependencia económica no haya llegado a todos los países, comunidades e individuos, y por que esos beneficios estén, cada vez más, fuera del alcance de varios países, particularmente los países menos adelantados y los países africanos,

Consciente de la necesidad de contar con recursos nuevos y adicionales para financiar los programas de desarrollo de los países en desarrollo,

Reafirmando la importancia crucial que tiene el aumento de los recursos asignados a la asistencia oficial para el desarrollo y recordando que los países industrializados se han comprometido a asignar el 0,7% de su producto interno bruto a la asistencia oficial para el desarrollo,

Considerando que no se ha prestado suficiente atención a la solidaridad internacional como componente fundamental de los esfuerzos que despliegan los países en desarrollo para que sus pueblos disfruten del derecho al desarrollo y para promover el pleno goce de los derechos económicos, sociales y culturales de todos,

1. Reafirma que la democracia, el desarrollo y el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales son conceptos interdependientes;

2. Acoge con beneplácito el reconocimiento expresado en la declaración adoptada por los Jefes de Estado y de Gobierno en la Cumbre del Milenio del valor fundamental de la solidaridad para las relaciones internacionales en el siglo XXI al afirmarse que los problemas mundiales deben abordarse de manera tal que los costos y las cargas se distribuyan con justicia, conforme a los principios fundamentales de la equidad y la justicia social, y que los que sufren, o los que menos se benefician, merecen la ayuda de los más beneficiados;

3. Insta a la comunidad internacional a estudiar urgentemente los medios para promover y consolidar la asistencia internacional a los países en desarrollo en sus esfuerzos por lograr el desarrollo y promover las condiciones que hagan posible el pleno disfrute de todos los derechos humanos;

4. Decide seguir examinando esta cuestión en su 58º período de sesiones, en relación con el mismo tema del programa.

78ª sesión,
25 de abril de 2001.
[Aprobada en votación nominal por 36 votos contra 16.
Véase cap. XVII.]

2001/74. Secuestro de niños en Uganda septentrional

La Comisión de Derechos Humanos,

Guiada por los principios establecidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, el Convenio para la represión de la trata de personas y de la explotación de la prostitución ajena, la Convención sobre los Derechos del Niño y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,

Recordando la Declaración y el Programa de Acción de Viena aprobados en junio de 1993 por la Conferencia Mundial de Derechos Humanos, en los que se expresó preocupación por las violaciones de los derechos humanos durante los conflictos armados que afectan a la población civil, en particular a las mujeres, los niños, los ancianos y los discapacitados,

Recordando la obligación de los Estados Partes de respetar y observar estrictamente el derecho internacional humanitario de acuerdo con los Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949 relativos a la protección de las víctimas de los conflictos armados y sus Protocolos Adicionales de 1977, así como otros principios pertinentes del derecho internacional,

Acogiendo con satisfacción la aprobación por la Asamblea General del Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de niños en los conflictos armados, que servirá para fortalecer los instrumentos internacionales que protegen a los niños afectados por las guerras,

Recordando su resolución 2000/60, de 26 de abril de 2000, en la que la Comisión pidió a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos una

evaluación de la situación sobre el terreno en las zonas afectadas en lo que se refiere al secuestro de niños en Uganda septentrional,

Tomando nota del informe del Secretario General sobre los niños y los conflictos armados (A/55/163-S/2000/712) presentado a la Asamblea General y al Consejo de Seguridad, y de las conclusiones y recomendaciones presentadas en el informe del Representante Especial del Secretario General encargado de la cuestión de los niños en los conflictos armados (A/55/442),

Profundamente preocupada por el hecho de que continúen los secuestros, las torturas, las detenciones, las violaciones, la esclavización y el reclutamiento forzoso de niños en Uganda septentrional,

1. Toma nota del informe del Representante Especial del Secretario General encargado de la cuestión de los niños en los conflictos armados (E/CN.4/2001/76);
2. Condena en la forma más enérgica al Ejército de Resistencia del Señor por el continuo secuestro, tortura, asesinato, violación, esclavización y reclutamiento forzoso de niños en Uganda septentrional;
3. Exige que cesen inmediatamente en Uganda septentrional todos los secuestros y ataques del Ejército de Resistencia del Señor contra la población civil, en particular las mujeres y los niños;
4. Pide que el Ejército de Resistencia del Señor ponga en libertad de forma inmediata e incondicional a todos los niños que mantiene secuestrados en estos momentos y que asegure su regreso a sus hogares sanos y salvos;
5. Pide al Fondo de Contribuciones Voluntarias de las Naciones Unidas para las Víctimas de la Tortura, creado en cumplimiento de la resolución 36/151 de la Asamblea General, de 16 de diciembre de 1981, que continúe proporcionando asistencia a las víctimas y a sus familias que padecen los efectos de las torturas infligidas por el Ejército de Resistencia del Señor;
6. Encarece a todos los Estados Miembros, a las organizaciones internacionales, a los organismos humanitarios y a otras partes interesadas que tengan influencia sobre el Ejército de

Resistencia del Señor que le apliquen toda la presión posible a fin de que ponga en libertad de forma inmediata e incondicional a todos los niños secuestrados en Uganda septentrional;

7. Insta a todas las partes que apoyan la continuación de los secuestros y de las detenciones de niños por el Ejército de Resistencia del Señor a que cesen de inmediato toda la asistencia al ejército rebelde y la colaboración con el mismo;

8. Acoge con beneplácito el acuerdo bilateral entre el Sudán y Uganda, firmado por los Presidentes de ambos países en Nairobi el 8 de diciembre de 1999;

9. También acoge con beneplácito el regreso de algunos de los niños secuestrados y pide mayores esfuerzos para liberar a los demás niños que se encuentran cautivos de los rebeldes;

10. Agradece el compromiso contraído por los Gobiernos del Sudán y Uganda de realizar un esfuerzo especial para localizar y devolver a sus familias a las personas, en especial a los niños, que han sido secuestradas en el pasado;

11. Toma nota de los esfuerzos recientemente realizados por los Gobiernos del Sudán y Uganda, complementados por los del Representante Especial del Secretario General encargado de la cuestión de los niños en los conflictos armados, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y las organizaciones intergubernamentales, que permitieron identificar y reunir con sus familias a un mayor número de esos niños;

12. Toma nota con agradecimiento de la declaración de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en la que presentó las conclusiones preliminares del equipo enviado por su Oficina para evaluar la situación sobre el terreno en las zonas afectadas;

13. Destaca la gravedad del problema e insta a las Naciones Unidas y a la comunidad internacional a que prosigan sus esfuerzos concertados para mejorar la situación en lo que respecta al secuestro de niños y a atender las necesidades de las víctimas;

14. Decide continuar el examen de esta cuestión en su 58º período de sesiones en relación con el mismo tema del programa.

79ª sesión,
25 de abril de 2001.
[Aprobada sin votación. Véase cap. XIII.]

2001/75. Derechos del niño

La Comisión de Derechos Humanos,

Teniendo presente la Convención sobre los Derechos del Niño, destacando que sus disposiciones y otros instrumentos pertinentes de derechos humanos deben constituir la norma en la promoción y protección de los derechos del niño, y reafirmando que el interés superior de éste ha de ser la consideración primordial en todas las medidas que se adopten en relación con la infancia,

Celebrando los cambios introducidos en los últimos años en las normas jurídicas internacionales, especialmente la adopción de los Protocolos Facultativos de la Convención sobre los Derechos del Niño relativos a la participación de niños en los conflictos armados y a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía, el Convenio N° 182 de la Organización Internacional del Trabajo sobre la prohibición de las peores formas de trabajo infantil y la acción inmediata para su eliminación, y el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, reconociendo la importancia histórica de la aprobación del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, y tomando nota con interés de la entrada en vigor del Protocolo facultativo de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer,

Reafirmando el consenso logrado en las resoluciones pertinentes aprobadas por la Comisión de Derechos Humanos en su 56º período de sesiones y por la Asamblea General en su quincuagésimo quinto período de sesiones, así como en todas las resoluciones anteriores relativas a este tema,

Reafirmando también el principio fundamental establecido en la Declaración y Programa de Acción de Viena y en la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, aprobadas en septiembre de 1995 por la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer (A/CONF.177/20, cap. I), de que los derechos humanos de las mujeres y las niñas son parte inalienable, integral e indivisible de los derechos humanos universales, y recalcando la necesidad de seguir incorporando los derechos del niño, así como una perspectiva de género, en todas las políticas y programas relacionados con la infancia,

Reafirmando asimismo la Declaración Mundial sobre la Supervivencia, la Protección y el Desarrollo del Niño y el Plan de Acción aprobados en septiembre de 1990 por la Cumbre Mundial en favor de la Infancia (A/45/625, anexo), y la Declaración y Programa de Acción de Viena, aprobados en junio de 1993 en la Conferencia Mundial de Derechos Humanos, en que, entre otras cosas, se indica que deben reforzarse los mecanismos y programas nacionales e internacionales de salvaguardia y protección de los niños, en particular de los niños en circunstancias especialmente difíciles, incluso con medidas eficaces para combatir los casos de explotación y maltrato de niños, el infanticidio femenino y el empleo de niños en trabajos peligrosos, y la eliminación inmediata de sus peores formas, la venta de niños y de sus órganos, la prostitución y la utilización de los niños en la pornografía y otras formas de abuso sexual, y se reafirma que todos los derechos humanos y las libertades fundamentales son universales,

Observando con satisfacción la función que ha desempeñado el Comité de los Derechos del Niño al examinar los progresos realizados por los Estados Partes en el cumplimiento de las obligaciones dimanantes de la Convención, y al formular recomendaciones a los Estados Partes sobre su aplicación y, en cooperación con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, al dar a conocer los principios y disposiciones de la Convención,

Profundamente preocupada porque en muchas partes del mundo la situación de los niños sigue siendo crítica a causa de la persistencia de la pobreza, las condiciones sociales y económicas inadecuadas, en una economía mundial cada vez más globalizada, las pandemias, en particular el VIH/SIDA, los desastres naturales, los conflictos armados, los desplazamientos, la explotación, el analfabetismo, el hambre, la intolerancia, la discriminación, la discapacidad, así

como la protección jurídica insuficiente, y convencida de que es preciso tomar medidas urgentes y eficaces a nivel nacional e internacional,

Alarmada ante la realidad de las violaciones diarias de los derechos de los niños, incluido el derecho a la vida, a la seguridad física y a no ser sometidos a detención arbitraria, torturas ni a ninguna forma de explotación, como se establece en los instrumentos internacionales pertinentes,

Apoyando los preparativos del período extraordinario de sesiones de la Asamblea General que ha de celebrarse en 2001, para el seguimiento de la Cumbre Mundial en favor de la Infancia, alentando a los Estados a que participen activamente en él con miras a promover un examen efectivo de los progresos realizados, así como la determinación de los obstáculos que entorpecen la plena aplicación de los resultados de la Cumbre Mundial, como reafirmación de su decidido empeño en defender los derechos de la infancia, y exhortando a que se apliquen estrategias orientadas hacia el futuro, adoptando un claro planteamiento en pro de los derechos del niño,

Acogiendo con beneplácito la integración de las cuestiones relacionadas con la infancia en los preparativos y los resultados de la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia, que se celebrará en septiembre de 2001,

Insistiendo en la importancia de adoptar un planteamiento de los derechos del niño en los preparativos del período extraordinario de sesiones de la Asamblea General sobre el VIH/SIDA que ha de celebrarse en junio de 2001 y la necesidad de un criterio concertado respecto de los niños afectados o infectados por la pandemia, incluidos los que han quedado huérfanos como consecuencia de ella, centrándose en particular en las regiones más gravemente afectadas de África, y de atribuir importancia al tratamiento, la atención y el respaldo de los niños infectados por el VIH/SIDA,

Acogiendo con satisfacción los informes del Secretario General acerca de la situación de la Convención sobre los Derechos del Niño (E/CN.4/2001/74), de la Relatora Especial sobre el derecho a la educación (E/CN.4/2001/52), de la Relatora Especial sobre la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía (E/CN.4/2001/78 y Add.1 y 2), del Representante Especial del Secretario General sobre el impacto de los conflictos armados en los niños a la Asamblea General en su quincuagésimo quinto período de sesiones (A/55/442) y a

la Comisión de Derechos Humanos en su 57º período de sesiones (E/CN.4/2001/76), y del Secretario General sobre los niños y los conflictos armados (A/55/163-S/2000/712),

Reafirmando que la familia es la célula fundamental de la sociedad y el medio natural para el crecimiento y el bienestar de los niños, y reconociendo que éstos deberían crecer en un entorno familiar y en un clima social de paz, respeto, felicidad, amor y comprensión,

Preocupada por el número de adopciones ilegales, de niños que crecen sin padres y de niños víctimas de la violencia en la familia y la sociedad, de falta de atención y de malos tratos,

Consciente de los compromisos contraídos por los Jefes de Estado y de Gobierno, y de los objetivos definidos en la Declaración del Milenio, de las Naciones Unidas, relativa al ejercicio efectivo, la promoción y la protección de los derechos del niño,

Reconociendo que la colaboración entre los gobiernos, las organizaciones internacionales y los órganos y organizaciones competentes del sistema de las Naciones Unidas, en particular el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, y todos los sectores de la sociedad civil, en especial las organizaciones no gubernamentales, así como el sector privado, es importante para el ejercicio efectivo de los derechos del niño,

Acogiendo con satisfacción el Decenio Internacional de una cultura de paz y no violencia para los niños del mundo (2001-2010) y la Declaración y Programa de Acción sobre una Cultura de Paz, que sirven de base al Decenio Internacional,

Acogiendo también con satisfacción la convocatoria del Segundo Congreso Mundial contra la Explotación Sexual Comercial de los Niños en diciembre de 2001 en Yokohama (Japón), y de las reuniones regionales de consulta,

I. APLICACIÓN DE LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO Y OTROS INSTRUMENTOS

1. Insta una vez más a los Estados que aún no lo hayan hecho a que, como cuestión prioritaria, estudien la posibilidad de firmar y ratificar la Convención sobre los Derechos del Niño o de adherirse a ella, con miras a alcanzar la meta de una adhesión universal, y a que consideren, como cuestión prioritaria, la posibilidad de firmar y ratificar los Protocolos

Facultativos de la Convención sobre los Derechos del Niño relativos a la participación de niños en los conflictos armados y a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía a fin de que puedan entrar en vigor lo antes posible, teniendo presente la convocatoria del período extraordinario de sesiones de la Asamblea General para el seguimiento de la Cumbre Mundial en favor de la Infancia en septiembre de 2001;

2. Reitera su preocupación por el gran número de reservas a la Convención e insta a los Estados Partes a que retiren las reservas que sean incompatibles con la finalidad y el propósito de la Convención, y a que consideren la posibilidad de examinar las demás reservas con miras a retirarlas;

3. Exhorta a los Estados Partes a que apliquen plenamente la Convención y velen por que los derechos enunciados en ella se respeten sin discriminación de ningún tipo, que el interés superior del niño sea la consideración básica de todas las actividades relacionadas con la infancia, a que reconozcan el derecho inherente del niño a la vida y que deben garantizarse la supervivencia y el desarrollo del niño en la mayor medida posible, y que el niño pueda expresar libremente sus opiniones en todas las cuestiones que le afecten y que esas opiniones se escuchen y se tomen debidamente en consideración, en función de la edad y madurez del niño;

4. Insta a los Estados Partes a que tomen todas las medidas apropiadas para la aplicación de los derechos reconocidos en la Convención, teniendo presente el artículo 4 de ésta, fortaleciendo las estructuras gubernamentales pertinentes que se ocupan de los niños, con inclusión, cuando proceda, de los ministros encargados de las cuestiones de la infancia y los comisionados independientes para los derechos del niño;

5. Exhorta a los Estados Partes a que:

a) Acepten con carácter prioritario la enmienda al párrafo 2 del artículo 43 de la Convención, relativa al aumento del número de miembros del Comité de los Derechos del Niño de 10 a 18;

b) Velen por que los miembros sean personas de gran integridad moral y reconocida competencia en las esferas reguladas por la Convención y que ejerzan sus funciones a título

personal, teniéndose debidamente en cuenta una distribución geográfica equitativa, así como los principales ordenamientos jurídicos;

c) Cumplan puntualmente las obligaciones de presentar informes que les impone la Convención de conformidad con las directrices del Comité de los Derechos del Niño, que tengan en cuenta las recomendaciones del Comité al aplicar las disposiciones de la Convención y que intensifiquen su cooperación con el Comité;

6. Pide a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, a los mecanismos de las Naciones Unidas y a todos los órganos competentes del sistema de las Naciones Unidas, en particular los representantes especiales, los relatores especiales y los grupos de trabajo, que incorporen regular y sistemáticamente la perspectiva de los derechos del niño en el cumplimiento de sus mandatos, y exhorta a los Estados a que cooperen estrechamente con ellos;

7. Reafirma la importancia de proporcionar sistemáticamente una capacitación adecuada en materia de derechos del niño a las fuerzas del orden y otros profesionales cuyo trabajo tiene consecuencias para los niños, y de garantizar la coordinación entre los distintos órganos gubernamentales;

8. Insta a los Estados a que pongan fin a la impunidad, en su caso, de todos los delitos, en particular cuando las víctimas sean niños, en especial los delitos de genocidio y los crímenes de lesa humanidad y de guerra, y a que enjuicien a los autores;

9. Insta también a todos los Estados y a todas las entidades competentes e interesadas a que sigan cooperando con los relatores especiales y los representantes especiales del sistema de las Naciones Unidas en el cumplimiento de sus mandatos, pide al Secretario General que les proporcione el personal y los medios necesarios con cargo al presupuesto ordinario de las Naciones Unidas, de conformidad con sus respectivos mandatos, invita a los Estados a que sigan aportando, cuando proceda, contribuciones voluntarias y exhorta a todos los órganos y organizaciones competentes del sistema de las Naciones Unidas a que les faciliten informes completos a fin de que puedan desempeñar plenamente su mandato;

10. Decide, con respecto al Comité de Derechos del Niño, pedir al Secretario General que, con cargo al presupuesto ordinario de las Naciones Unidas, facilite el personal y los medios necesarios para que el Comité pueda cumplir de manera eficaz y rápida sus funciones, e invita al Comité a que intensifique su diálogo constructivo con los Estados Partes y aumente la transparencia y eficacia de su funcionamiento;

II. PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS DEL NIÑO

Identidad, relaciones familiares y registro de nacimientos

Reafirmando el párrafo 15 de la resolución 2000/85 de la Comisión de Derechos Humanos, de 27 de abril de 2000,

11. Pide a todos los Estados:

a) Que sigan intensificando sus esfuerzos por garantizar la inscripción de todos los niños inmediatamente después de su nacimiento, en particular considerando la posibilidad de utilizar procedimientos simplificados, rápidos y eficientes;

b) Que se comprometan a respetar el derecho del niño a preservar su identidad, incluidos la nacionalidad, el nombre y las relaciones familiares, tal como se reconocen en la ley, sin injerencias ilícitas, y que cuando se prive ilegalmente a un niño de todos o alguno de los elementos de su identidad, le presten asistencia y protección adecuadas para restablecerla rápidamente;

c) Que garanticen en la medida de lo posible el derecho del niño a conocer a sus padres y a ser atendido por ellos, y que velen por que no se separe a un niño de sus padres contra la voluntad de éstos, excepto cuando las autoridades competentes, previo examen judicial, decidan de conformidad con las leyes y procedimientos aplicables que esa separación es necesaria en interés superior del niño, de conformidad con el artículo 9 de la Convención;

Salud

Reafirmando los párrafos 16 a 19 de la resolución 2000/85 de la Comisión de Derechos Humanos,

12. Pide a todos los Estados que adopten todas las medidas apropiadas para crear sistemas de salud y servicios sociales sostenibles y garantizar el acceso a tales sistemas y servicios sin discriminación alguna, y que presten especial atención al logro de una alimentación y nutrición adecuadas a fin de prevenir las enfermedades y la malnutrición, a la atención sanitaria prenatal y posnatal, a las necesidades especiales de los adolescentes, a la salud reproductiva y sexual y a los riesgos que representa el uso indebido de sustancias nocivas y la violencia, y exhorta a todos los Estados Partes a que tomen todas las medidas necesarias para garantizar el derecho de todos los niños, sin discriminación alguna, al disfrute del más alto nivel posible de salud de conformidad con el artículo 24 de la Convención sobre los Derechos del Niño;

13. Pide también a todos los Estados que proporcionen apoyo y rehabilitación a los niños afectados por el VIH/SIDA y a sus familias, que tomen disposiciones para lograr la participación de los propios niños y los encargados de su cuidado, así como del sector privado, y que aseguren una prevención eficaz de las infecciones por VIH mediante información correcta y el acceso a atención sanitaria, tratamiento y pruebas y análisis que sean asequibles, voluntarios y de carácter confidencial, atribuyendo la debida importancia a impedir la transmisión del virus de madre a hijo;

Educación

Reafirmando los párrafos 20 y 21 de la resolución 2000/85 de la Comisión de Derechos Humanos,

14. Exhorta a todos los Estados:

a) A que reconozcan el derecho a la educación basado en la igualdad de oportunidades implantando la enseñanza primaria gratuita y obligatoria para todos y velando por que todos los niños y niñas, incluidos los que necesitan una protección especial y los niños indígenas o pertenecientes a minorías, tengan acceso, sin discriminación alguna, a una enseñanza de buena calidad, así como poniendo la enseñanza secundaria general al alcance de todos y, en particular, mediante la introducción gradual de la enseñanza gratuita, teniendo en cuenta que la acción afirmativa contribuye al logro de la igualdad de oportunidades y a combatir la exclusión, y a que

se aseguren de que la enseñanza y la elaboración y ejecución de los programas para la educación de los niños, se efectúan de conformidad con los artículos 28 y 29 de la Convención;

b) A que adopten todas las medidas apropiadas para prevenir el racismo y las actitudes y conductas discriminatorias y xenófobas, mediante la educación, teniendo en cuenta la importante función que los niños desempeñan en la modificación de estas prácticas;

c) A que velen por que los niños, desde una edad temprana, reciban educación y puedan participar en actividades que promuevan el respeto de los derechos humanos e insistan en la práctica de la no violencia a fin de inculcarles los valores y objetivos de una cultura de paz;

15. Reafirma el Marco de Acción de Dakar y exhorta a que se aplique plenamente, y, a este respecto, invita a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura a que siga cumpliendo su mandato de coordinar la iniciativa "Educación para todos" y de mantener su impulso de colaboración;

16. Observa con interés que recientemente el Comité de los Derechos del Niño aprobó una observación general sobre las finalidades de la educación, así como observaciones generales como medio de cooperar con los Estados Partes en la aplicación de la Convención;

Protección contra la violencia

Reafirmando los párrafos 22 a 24 de su resolución 2000/85,

17. Toma nota con reconocimiento de la iniciativa del Comité de los Derechos del Niño en relación con los actos de violencia estatales contra los niños, celebra el debate general que se celebrará en septiembre de 2001 sobre el tema de la violencia contra los niños en las escuelas y en la familia, y la recomendación hecha por el Comité de los Derechos del Niños de que se pida al Secretario General, por conducto de la Asamblea General, que se realice un estudio a fondo de la cuestión de la violencia contra los niños, incluidos los diferentes tipos de trato violento de que son víctimas, se determinen sus causas, el alcance de esa violencia y sus efectos en los niños, y se formulen recomendaciones para la adopción de medidas, que incluyan recursos eficaces y actividades de prevención y rehabilitación;

18. Invita a todos los Estados a que adopten todas las medidas nacionales, bilaterales y multilaterales apropiadas para prevenir toda forma de violencia contra los niños y protegerlos de la tortura y otras formas de violencia, la violencia física, que incluye la violencia en el hogar, el maltrato de menores, la violencia mental y sexual, los abusos por parte de la policía y de otras autoridades encargadas de hacer cumplir la ley o del personal de centros de detención de menores, orfanatos, instituciones y otros centros de atención de la infancia, así como la violencia en las calles y en las escuelas;

19. Invita también a todos los Estados a que investiguen y pongan en conocimiento de las autoridades competentes los casos de tortura y otras formas de violencia ejercida contra los niños, a fin de enjuiciar a los responsables de esas prácticas e imponerles las sanciones disciplinarias o penales correspondientes;

III. NO DISCRIMINACIÓN

20. Pide a todos los Estados en los que residan minorías étnicas, religiosas o lingüísticas o personas de origen indígena, que no nieguen al niño que pertenezca a esa minoría o que sea indígena el derecho al disfrute, en compañía de otros miembros de su grupo, de su propia cultura, a profesar y practicar su propia religión o a utilizar su propio idioma;

La niña

Reafirmando los párrafos 26 a 28 de su resolución 2000/85,

21. Exhorta a todos los Estados a que adopten todas las medidas necesarias, incluso reformas jurídicas, según proceda, para:

a) Garantizar el disfrute pleno y en condiciones de igualdad por parte de la niña de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales, a que actúen de forma eficaz contra las violaciones de esos derechos y libertades y a que basen los programas y políticas relativas a la niña en los derechos del niño;

b) Eliminar todas las formas de discriminación contra las niñas, en particular todas las formas de violencia, las prácticas tradicionales o consuetudinarias perjudiciales, especialmente la mutilación genital femenina; las causas de la preferencia por los hijos varones, los matrimonios sin el consentimiento libre y total de los contrayentes y los matrimonios a edad temprana, promulgando y haciendo cumplir la legislación y, según proceda, formulando planes, programas o estrategias de protección de las niñas amplios, multidisciplinarios y coordinados;

Los niños discapacitados

Reafirmando el párrafo 29 de su resolución 2000/85,

22. Pide a todos los Estados que adopten todas las medidas necesarias para asegurar que los niños discapacitados gocen plenamente y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales y, siempre que sea necesario, formulen y hagan cumplir leyes que prohíban la discriminación contra esos niños; velen por la dignidad, fomenten la capacidad de valerse por sí mismos y faciliten la participación activa del niño en la comunidad, en particular mediante un acceso adecuado y efectivo de los niños discapacitados y de sus padres a una educación de calidad satisfactoria, teniendo en cuenta la situación de los niños discapacitados que viven en la pobreza;

Los niños migrantes

Reafirmando el párrafo 30 de su resolución 2000/85,

23. Pide a todos los Estados que garanticen, según proceda, el acceso de los niños migrantes a las escuelas, sobre todo de los que no están acompañados, así como el acceso al nivel más alto posible de servicios sociales, en particular el acceso a los servicios de salud y la prestación de estos servicios;

IV. PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS EN SITUACIONES ESPECIALMENTE DIFÍCILES

Los niños que trabajan y/o viven en la calle

Reafirmando el párrafo 31 de su resolución 2000/85,

24. Pide a todos los Estados que impidan las ejecuciones arbitrarias y sumarias, la tortura, todas las formas de violencia contra los niños que trabajan y/o viven en la calle y su explotación, así como otras violaciones de sus derechos humanos, y que lleven a los autores de esas violaciones ante la justicia, aprueben y apliquen políticas de protección, rehabilitación y reintegración de esos niños, y adopten soluciones económicas y sociales para tratar de resolver los problemas de los niños que trabajan y/o viven en la calle;

Los niños refugiados y desplazados internamente

Reafirmando el párrafo 32 de su resolución 2000/85,

25. Pide a todos los Estados que protejan a los niños refugiados, a los no acompañados que busquen asilo y a los desplazados internamente que están particularmente expuestos a riesgos en relación con los conflictos armados, como ser reclutados o ser objeto de violencia y explotación sexual, que presten atención especial a programas de repatriación voluntaria y, siempre que sea posible, a la integración y el reasentamiento local, que den prioridad a la localización y reunificación de las familias y, si procede, que cooperen con las organizaciones internacionales encargadas de cuestiones humanitarias y de refugiados;

Trabajo infantil

Reafirmando los párrafos 33 y 34 de su resolución 2000/85,

26. Pide a todos los Estados que traduzcan en medidas concretas su compromiso de erradicar gradual y efectivamente el trabajo infantil que pueda resultar peligroso e interferir en la educación del niño, o que sea perjudicial para la salud o el desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social del niño, y que erradiquen de inmediato las peores formas de trabajo infantil; que promuevan la educación por ser una estrategia fundamental

a este respecto, en particular mediante la creación de programas de formación profesional y de aprendizaje y la integración de los niños que trabajan en el sistema de enseñanza oficial, y que examinen y conciben políticas económicas, de ser necesario en cooperación con la comunidad internacional, para hacer frente a los factores que contribuyen a esas formas de trabajo infantil;

27. Pide a todos los Estados que aún no lo hayan hecho que consideren la posibilidad de ratificar el Convenio N° 182 de la OIT sobre la prohibición de las peores formas de trabajo infantil y la acción inmediata para su eliminación, aprobado en junio de 1999;

Niños acusados o culpables de infracciones del derecho penal

Reafirmando el párrafo 35 y los apartados a) y d) del párrafo 36 de su resolución 2000/85,

28. Pide:

a) A los gobiernos de todos los Estados, en particular los Estados que no han abolido la pena capital, que cumplan las obligaciones que han contraído en virtud de las disposiciones pertinentes de los instrumentos internacionales de derechos humanos, incluidos en especial los artículos 37 y 40 de la Convención sobre los Derechos del Niño y los artículos 6 y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, teniendo presentes las salvaguardias y garantías formuladas en las resoluciones 1984/50 y 1989/64 del Consejo Económico y Social;

b) A todos los Estados que adopten medidas adecuadas para que se respete el principio de que sólo como último recurso se debe privar de libertad a los menores y durante el período más breve posible, en particular antes del juicio, y asegurar que, de ser detenidos o encarcelados, los menores estén separados de los adultos, en la mayor medida posible, salvo que se considere que el interés del niño aconseja no hacerlo, y adopten asimismo las medidas apropiadas para garantizar que ningún niño detenido sea condenado a trabajo forzoso ni privado de servicios de atención médica, higiene y saneamiento ambiental, educación e instrucción básica, tomando en consideración las necesidades

especiales de los niños discapacitados que estén detenidos, de conformidad con las obligaciones que les impone la Convención sobre los Derechos del Niño;

V. PREVENCIÓN Y ERRADICACIÓN DE LA VENTA DE NIÑOS, LA
PROSTITUCIÓN INFANTIL Y LA UTILIZACIÓN DE NIÑOS
EN LA PORNOGRAFÍA

Reafirmando los párrafos 37 a 42 de su resolución 2000/85,

29. Pide a todos los Estados que:

a) Adopten todas las medidas nacionales, bilaterales y multilaterales apropiadas, entre otras cosas, para formular leyes, políticas, programas y prácticas nacionales y reúnan datos amplios y desglosados por sexo, faciliten la participación de los niños que han sido víctimas de explotación sexual en la formulación de estrategias y garanticen la aplicación eficaz de los instrumentos internacionales pertinentes relativos a la prevención y la lucha en materia de trata y venta de niños con cualquier finalidad y en cualquier forma, incluida la cesión de órganos de un menor con fines de lucro, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía, y alienta a todos los integrantes de la sociedad civil, al sector privado y a los medios de comunicación a que cooperen en esos esfuerzos;

b) Aumenten la cooperación a todos los niveles para prevenir el establecimiento de redes que se dediquen a la trata de niños y para dismantelarlas;

c) Tipifiquen como delito y castiguen efectivamente todas las formas de explotación y abuso sexual de menores, incluso en la familia o con fines comerciales, la utilización de niños en la pornografía y la prostitución infantil, el turismo sexual de menores y el uso de Internet con estos fines, garantizando al mismo tiempo que, en el ordenamiento penal, el interés superior de los niños víctimas de esas prácticas sea una consideración primordial, y que adopten medidas eficaces para garantizar el enjuiciamiento de los autores, sean nacionales o extranjeros, por las autoridades nacionales competentes, ya sea en el país de origen del delincuente o en el país de destino, respetando las debidas garantías procesales;

d) Luchen contra la existencia de un mercado que aliente esas prácticas delictivas contra los niños, incluso mediante la adopción de medidas preventivas y represivas dirigidas contra los clientes o las personas que explotan o maltratan sexualmente a los niños;

30. Decide renovar por otros tres años el mandato de la Relatora Especial sobre la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía y le pide que presente un informe a la Comisión de Derechos Humanos en su 58º período de sesiones;

VI. PROTECCIÓN DE LOS NIÑOS AFECTADOS POR CONFLICTOS ARMADOS

Reafirmando los párrafos 43 a 56 de su resolución 2000/85,

31. Toma nota de la importancia del tercer debate sobre los niños y los conflictos armados, celebrado por el Consejo de Seguridad el 26 de julio de 2000, y del compromiso del Consejo de prestar especial atención a la protección, el bienestar y los derechos de los niños al adoptar medidas encaminadas al mantenimiento de la paz y la seguridad, y reafirma el papel fundamental de la Asamblea General y del Consejo Económico y Social en la promoción y protección de los derechos y el bienestar de los niños;

32. Toma nota con reconocimiento del Programa de Winnipeg para los niños afectados por la guerra y de las gestiones que realizan algunas organizaciones regionales, en particular la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, la Unión Europea, la Comunidad Económica de Estados de África Occidental, la Organización de los Estados Americanos y la Organización de la Unidad Africana, para que los derechos y la protección de los niños afectados por conflictos armados ocupen un lugar destacado en sus políticas y programas;

33. Toma nota de la aprobación del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, en particular de que en él se tipifica como crimen de guerra el reclutamiento o alistamiento de menores de 15 años o su utilización para que participen activamente en las hostilidades tanto en conflictos armados internacionales como no internacionales;

34. Pide a los Estados que:

a) Pongan fin a la utilización de niños como soldados en contravención de las obligaciones contraídas en virtud del Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de niños en los conflictos armados y otros instrumentos internacionales de derechos humanos pertinentes;

b) Al ratificar el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de niños en los conflictos armados, aumenten la edad mínima de reclutamiento voluntario en sus fuerzas armadas nacionales por encima de la establecida en el párrafo 3 del artículo 38 de la Convención sobre los Derechos del Niño, teniendo presente que, con arreglo a la Convención, los menores de 18 años tienen derecho a protección especial, y que adopten salvaguardias para garantizar que ese reclutamiento no sea forzoso ni mediante coacción;

c) Velen por que el reclutamiento de menores en sus fuerzas armadas no sea forzoso ni obligatorio;

d) Adopten todas las medidas viables para prevenir el reclutamiento y la utilización de niños por grupos armados, que no sean las fuerzas armadas de un Estado, entre otras, la adopción de las medidas jurídicas necesarias para prohibir esas prácticas y tipificarlas como delito;

35. Pide:

a) A todos los Estados y a otras partes en los conflictos armados que respeten cabalmente el derecho internacional humanitario y, a este respecto, exhorta a los Estados Partes a que respeten plenamente las disposiciones de los Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949 y de sus Protocolos adicionales de 1977;

b) A todos los Estados y a los órganos y organismos pertinentes de las Naciones Unidas y a las organizaciones regionales que integren los derechos del niño en todas sus actividades durante situaciones de conflicto y posteriormente, y que faciliten la participación de los niños en la formulación de estrategias al respecto, cerciorándose de que los niños tengan posibilidades de ser escuchados;

c) A todos los Estados y a los órganos competentes de las Naciones Unidas que continúen prestando apoyo a las actividades nacionales e internacionales de remoción de minas, incluso mediante contribuciones financieras, programas de información sobre las minas, remoción de minas, asistencia a las víctimas y rehabilitación fundamentalmente de niños, tomando nota de la Convención sobre la prohibición del empleo, almacenamiento, producción y transferencia de minas antipersonal y sobre su destrucción, y expresa satisfacción por los efectos positivos que tiene en los niños la adopción de medidas legislativas concretas y de medidas de otra índole respecto de las minas antipersonal, tomando nota además del Protocolo Enmendado sobre Prohibiciones o Restricciones del Uso de Minas, Armas Trampa y otros Artefactos (Protocolo II) de la Convención sobre prohibiciones o restricciones del empleo de ciertas armas convencionales que puedan considerarse excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados y de la aplicación de estos instrumentos por los Estados que sean Partes en ellos;

36. Recomienda que, cuando se impongan sanciones en el marco de un conflicto armado, se evalúen y vigilen sus efectos en los niños y que, en la medida en que haya excepciones de carácter humanitario, se tenga en cuenta a los niños y se formulen con directrices claras respecto de su aplicación, a fin de que se traten los posibles efectos adversos de esas sanciones, y reafirma las recomendaciones de la Asamblea General y de la Conferencia Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja;

VII. RECUPERACIÓN Y REINTEGRACIÓN SOCIAL

Reafirmando el párrafo 57 de su resolución 2000/85,

37. Alienta a los Estados a que cooperen, en particular mediante la cooperación técnica bilateral y multilateral y la asistencia financiera, en el cumplimiento de las obligaciones contraídas en virtud de la Convención sobre los Derechos del Niño, que abarcan la prevención de toda actividad contraria a los derechos del niño y la rehabilitación e integración social de las víctimas, debiendo prestarse esa asistencia y esa cooperación mediante consultas entre los Estados interesados y las organizaciones internacionales pertinentes;

VIII.

38. Decide:

a) Pedir al Secretario General que presente a la Comisión, en su 58º período de sesiones, un informe sobre los derechos del niño que contenga información relativa a la situación de la Convención sobre los Derechos del Niño y a los problemas de que trata la presente resolución;

b) Seguir examinando esta cuestión en su 58º período de sesiones en relación con el mismo tema del programa.

79ª sesión,
25 de abril de 2001.
[Aprobada sin votación. Véase cap. XIII.]

2001/76. Distribución geográfica equitativa de los miembros de los órganos creados en virtud de tratados de derechos humanos

La Comisión de Derechos Humanos,

Reafirmando la importancia del objetivo de una ratificación universal de los instrumentos de derechos humanos de las Naciones Unidas,

Acogiendo con satisfacción el considerable aumento del número de ratificaciones de los instrumentos de derechos humanos de las Naciones Unidas, que ha contribuido de manera especial a su universalidad,

Reiterando la importancia del funcionamiento eficaz de los órganos creados en virtud de instrumentos de derechos humanos de las Naciones Unidas para la aplicación plena y efectiva de esos instrumentos,

Recordando que, con respecto a la elección de los miembros de los órganos creados en virtud de tratados de derechos humanos, la Comisión ya reconoció la importancia de tener en cuenta la distribución geográfica equitativa, el equilibrio de género y la representación de los principales ordenamientos jurídicos y de tener presente que los miembros serán elegidos y

ejercerán sus funciones a título personal y serán personas de gran prestigio moral y reconocida imparcialidad y competencia en materia de derechos humanos,

Recordando asimismo que la Comisión ya ha alentado a los Estados Partes en los tratados de derechos humanos de las Naciones Unidas a que, a título individual y por medio de reuniones de Estados Partes, estudien la mejor manera de aplicar, entre otras cosas, el principio de la distribución geográfica equitativa de los miembros de los órganos creados en virtud de tratados,

Expresando su preocupación por el acusado desequilibrio regional en la composición actual de los órganos creados en virtud de tratados de derechos humanos de las Naciones Unidas, con la excepción del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que ya está aplicando un sistema de cuotas en la distribución de sus puestos por grupos regionales,

Tomando nota en particular de que la situación actual tiende a ser particularmente desfavorable a la elección de expertos de algunos grupos regionales,

Convencida de que el objetivo de una distribución geográfica equitativa de los miembros de los órganos creados en virtud de tratados de derechos humanos es perfectamente compatible y puede realizarse y lograrse plenamente en armonía con la necesidad de garantizar un equilibrio de género y la representación de los principales ordenamientos jurídicos en esos órganos, así como logrando que los miembros sean personas de gran prestigio moral y reconocida imparcialidad y competentes en materia de derechos humanos,

1. Decide recomendar que la Asamblea General aliente a los Estados Partes en los instrumentos de derechos humanos de las Naciones Unidas a que establezcan sistemas de cuotas por regiones geográficas para la elección de los miembros de los órganos creados en virtud de tratados;

2. Recomienda que cuando se fijen cuotas por regiones geográficas en cada órgano creado en virtud de tratados, se introduzcan procedimientos flexibles, que tengan en cuenta los criterios siguientes:

a) Se asignará a cada uno de los cinco grupos regionales establecidos por la Asamblea General una parte de los puestos de cada órgano creado en virtud de tratados equivalente a la proporción del número total de Estados Partes en el instrumento que represente;

b) Deberán poder realizarse revisiones periódicas para tener en cuenta los cambios relativos que se produzcan en la distribución geográfica de los Estados Partes;

c) Se realizarán revisiones periódicas automáticas para no tener que modificar el texto del instrumento cuando se revisen las cuotas;

3. Subraya que el proceso necesario para lograr el objetivo de una distribución geográfica equitativa de los miembros de los órganos creados en virtud de tratados de derechos humanos puede contribuir a una mayor comprensión de la importancia del equilibrio de género, a la representación de los principales ordenamientos jurídicos y a la aplicación del principio de que los miembros de los órganos creados en virtud de tratados serán elegidos y desempeñarán sus funciones a título personal y serán personas de gran prestigio moral y de reconocida imparcialidad y competencia en materia de derechos humanos;

4. Decide seguir examinando esta cuestión en su 58º período de sesiones en relación con el mismo tema del programa.

79ª sesión,
25 de abril de 2001.

[Aprobada en votación nominal por 35 votos
contra 15 y 2 abstenciones. Véase cap. XVIII.]

2001/77. Cooperación regional para la promoción y protección de
los derechos humanos en la región de Asia y el Pacífico

La Comisión de Derechos Humanos,

Recordando su resolución 2000/74 de 26 de abril de 2000,

Reiterando que uno de los propósitos de las Naciones Unidas es lograr la cooperación internacional en la solución de problemas internacionales de carácter económico, social, cultural o humanitario, y en el desarrollo y estímulo del respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión,

Reafirmando que todos los derechos humanos son universales, indivisibles e interdependientes y están interrelacionados, que la comunidad internacional debe tratar todos los derechos humanos de manera justa y equitativa, en pie de igualdad y asignándoles la misma

importancia y que, si bien debe tenerse presente la importancia de las particularidades nacionales y regionales y los diversos contextos históricos, culturales y religiosos, es deber de los Estados, sea cual sea su sistema político, económico y cultural, promover y proteger todos los derechos humanos y las libertades fundamentales,

Destacando que la cooperación regional puede desempeñar una importante función en la promoción del respeto y la observancia universales de los derechos humanos y las libertades fundamentales,

Reconociendo la importancia de aplicar un criterio inclusivo, gradual, práctico y sólido para mejorar la cooperación regional en pro de la promoción y protección de los derechos humanos, según el ritmo y las prioridades que establezcan por consenso los gobiernos de la región de Asia y el Pacífico;

Reconociendo también la importancia de la educación en materia de derechos humanos en los contextos académico y no académico y la importante función que los medios de comunicación pueden desempeñar en la promoción y la protección de los derechos humanos,

Reconociendo además la valiosa contribución que pueden aportar las instituciones nacionales independientes, las organizaciones intergubernamentales y las organizaciones no gubernamentales en la esfera de los derechos humanos en la región de Asia y el Pacífico,

Acogiendo con satisfacción la celebración del noveno seminario sobre cooperación regional para la promoción y protección de los derechos humanos en la región de Asia y el Pacífico, que se celebró en Bangkok del 28 de febrero al 2 de marzo de 2001,

1. Acoge con satisfacción el informe del Secretario General (E/CN.4/2001/98) y los progresos realizados en la aplicación de la resolución 2000/74 de la Comisión;

2. Destaca la importancia de los vínculos y de los aspectos que se refuerzan mutuamente de las cuatro actividades previstas en el Programa Marco de Teherán para la cooperación técnica regional en la región de Asia y el Pacífico adoptado durante el sexto seminario sobre cooperación regional para la promoción y protección de los derechos humanos en la región de Asia y el Pacífico celebrado en 1998, a saber, la educación en materia de derechos humanos, las instituciones nacionales para la promoción y protección de los derechos

humanos, los planes nacionales de acción para la promoción y protección de los derechos humanos y el fortalecimiento de las capacidades nacionales en materia de derechos humanos, y las estrategias para la realización del derecho al desarrollo y los derechos económicos, sociales y culturales;

3. Destaca también que el fomento y fortalecimiento de las capacidades nacionales para la promoción y protección de los derechos humanos con arreglo a las condiciones nacionales constituye el fundamento más sólido para establecer una cooperación regional eficaz y duradera en la esfera de los derechos humanos en la región de Asia y el Pacífico;

4. Encomia la contribución hecha por el Gobierno de Tailandia como país anfitrión del noveno seminario a la promoción y protección de los derechos humanos en la región de Asia y el Pacífico;

5. Hace suyas las conclusiones del noveno seminario sobre las nuevas medidas que se han de tomar para facilitar el proceso de cooperación regional en la región de Asia y el Pacífico;

6. Acoge con satisfacción los debates a fondo celebrados durante el noveno seminario, en los que se examinó la evolución en la región de Asia y el Pacífico durante el último año en las cuatro esferas prioritarias identificadas en el Programa Marco de Teherán para la cooperación técnica regional en la región de Asia y el Pacífico;

7. Acoge también con satisfacción la intensificación del valioso intercambio de experiencias nacionales concretas que tuvo lugar en el noveno seminario en relación con la realización de las cuatro esferas del Programa Marco de Teherán para la cooperación técnica regional en la región de Asia y el Pacífico;

8. Toma nota de la contribución de las instituciones nacionales independientes, las organizaciones intergubernamentales y los representantes de organizaciones no gubernamentales al noveno seminario y de la iniciativa tomada por la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de organizar una consulta de entidades no gubernamentales un día antes de la inauguración oficial del noveno seminario;

9. Toma nota también de la diversidad de opiniones expresadas en el noveno seminario sobre las posibles modalidades regionales o subregionales de cooperación en la promoción y

protección de los derechos humanos en la región de Asia y el Pacífico como parte de un criterio inclusivo, gradual, práctico y sólido, así como de la evaluación de la aplicación del Programa Marco de Teherán para la cooperación técnica regional en la región de Asia y el Pacífico;

10. Toma nota con interés de los debates interactivos celebrados durante los seminarios intermedios acerca de la función de las instituciones nacionales de derechos humanos para la promoción de los derechos internacionales de la mujer (Fiji, mayo de 2000), los derechos humanos y el parlamento (Mongolia, agosto de 2000) y las instituciones nacionales y los derechos económicos, sociales y culturales (Filipinas, noviembre de 2000);

11. Toma nota de los debates celebrados en el noveno seminario y en los seminarios regionales intermedios sobre, entre otras cosas, todos los obstáculos que se oponen al ejercicio efectivo de los derechos económicos, sociales y culturales y del derecho al desarrollo, así como sobre la necesidad de cooperación internacional a fin de apoyar los esfuerzos de los países por superar esos obstáculos;

12. Toma también nota de la opinión expresada en el noveno seminario de que los planes de acción, la educación en materia de derechos humanos y las instituciones nacionales son instrumentos importantes para combatir el racismo y las formas afines de discriminación y de que en la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia se debe estudiar la manera de que esos instrumentos sean más útiles para resolver estos problemas, prestando particular atención a todos los grupos vulnerables de la sociedad;

13. Insta a todos los Estados de la región a que tomen medidas concretas en el plano nacional en relación con la aplicación del Programa Marco de Teherán para la cooperación técnica en la región de Asia y el Pacífico y a que se aseguren de que los seminarios regionales organizados como parte de ese Programa Marco vayan acompañados de actividades nacionales y subregionales concretas y sostenibles, así como de programas de formación y sensibilización para los funcionarios del Estado y los grupos profesionales interesados de importancia clave como la policía, el personal penitenciario, los educadores, los jueces, los abogados y los parlamentarios;

14. Celebra el establecimiento de instituciones nacionales independientes en países de la región de Asia y el Pacífico y su importante contribución al proceso de cooperación regional, en particular gracias a la labor del Foro de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos de la región de Asia y el Pacífico, y toma nota de los debates celebrados a este respecto en el seminario correspondiente;

15. Celebra también los esfuerzos de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos con objeto de establecer asociaciones para la realización de sus actividades como parte del Programa Marco de Teherán para la cooperación técnica en la región de Asia y el Pacífico a fin de aumentar las capacidades nacionales de promoción y protección de los derechos humanos en la región;

16. Alienta a todos los gobiernos de la región de Asia y el Pacífico a que consideren la posibilidad de utilizar los servicios ofrecidos por las Naciones Unidas, en el marco del programa de servicios de asesoramiento y cooperación técnica en la esfera de los derechos humanos, para seguir fortaleciendo las capacidades nacionales en materia de derechos humanos y, a este respecto, hace un llamamiento a la Alta Comisionada para que siga prestando la debida atención a este programa;

17. Pide al Secretario General que presente a la Comisión en su 58º período de sesiones un informe que contenga las conclusiones del décimo seminario sobre cooperación regional para la promoción y protección de los derechos humanos en la región de Asia y el Pacífico, e información sobre los progresos realizados en la aplicación de la presente resolución;

18. Decide seguir examinado esta cuestión en su 58º período de sesiones en relación con el mismo tema del programa.

79ª sesión,
25 de abril de 2001.
[Aprobada sin votación. Véase cap. XVIII.]

2001/78. Composición del personal de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos

La Comisión de Derechos Humanos,

Recordando que, en su informe a la Comisión Especial del Consejo Económico y Social (E/CN.4/1988/85 y Corr.1), la Comisión de Derechos Humanos reafirmó que la consideración primordial que se tendría en cuenta al nombrar al personal de todas las categorías sería la necesidad de asegurar el más alto grado de eficiencia, competencia e integridad y que estaba convencida de que este objetivo era compatible con el principio de una distribución geográfica equitativa y tenía en cuenta las disposiciones del párrafo 3 del Artículo 101 de la Carta de las Naciones Unidas,

Recordando también que, en los párrafos 11 y 17 de la Parte II de la Declaración y Programa de Acción de Viena, la Conferencia Mundial de Derechos Humanos pidió al Secretario General y a la Asamblea General que proporcionaran recursos humanos, económicos y de otra índole suficientes para que el Centro de Derechos Humanos pudiera realizar sus actividades en forma eficaz, eficiente y rápida, y reconoció la necesidad de reestructurar el mecanismo de las Naciones Unidas en la esfera de los derechos humanos para que respondiera a sus necesidades reales,

Reafirmando la trascendencia de las particularidades nacionales y regionales y de los diversos antecedentes históricos, culturales y religiosos, así como de los diferentes sistemas políticos, económicos y jurídicos,

Teniendo en cuenta la necesidad de prestar especial atención a la contratación para la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos de personal procedente de los países en desarrollo, lo que mejorará la composición actual del personal, sobre la base de una distribución geográfica más equitativa,

Observando con inquietud que en el informe presentado por la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos con arreglo a la resolución 2000/73 de la Comisión, de 26 de abril de 2000, relativo a la composición geográfica y las funciones del personal de la Oficina del Alto Comisionado (E/CN.4/2001/100) se observa claramente que una

región está excesivamente representada y que el desequilibrio ha empeorado (véase el anexo de la presente resolución),

Expresando nuevamente su preocupación por la insuficiente representación de los países en desarrollo en la Oficina del Alto Comisionado, teniendo presente en particular el criterio de la distribución geográfica equitativa,

1. Toma nota del informe de la Alta Comisionada sobre la composición del personal de la Oficina del Alto Comisionado (E/CN.4/2001/100);

2. Reitera su apoyo a la declaración de la Alta Comisionada ante la Tercera Comisión de la Asamblea General en su quincuagésimo segundo período de sesiones, en la que se manifestó dispuesta a lograr un buen equilibrio geográfico y a infundir un sentido de colaboración entre el Norte y el Sur en el empeño común de defender los derechos humanos, al llenar los puestos de categoría superior de importancia decisiva de la Oficina del Alto Comisionado;

3. Reafirma que el párrafo 3 del Artículo 101 de la Carta de las Naciones Unidas debe servir de guía al Secretario General en su política de contratación del personal de la Organización, teniendo en cuenta el criterio de la distribución geográfica equitativa;

4. Reafirma también las resoluciones de la Asamblea General 49/222 A y B, de 23 de diciembre de 1994 y 20 de julio de 1995, 51/226, de 3 de abril de 1997 y 53/221, de 7 de abril de 1999, sobre la gestión de los recursos humanos;

5. Reafirma asimismo el párrafo 8 de la sección IX de la resolución 53/221 de la Asamblea General sobre la gestión de los recursos humanos, en el que se reitera la solicitud hecha al Secretario General de que siga incrementando sus esfuerzos por mejorar la composición de la Secretaría garantizando una distribución geográfica amplia y equitativa del personal en todos los departamentos;

6. Considera que, en el proceso de reestructuración de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, es necesario adoptar medidas urgentes, concretas e inmediatas para modificar la actual distribución geográfica del personal de la Oficina, favoreciendo una distribución más equitativa de los puestos, de conformidad con el

Artículo 101 de la Carta, en particular mediante la contratación de personal de los países en desarrollo, incluso para puestos clave, y a este respecto invita a la Alta Comisionada a que estudie la posibilidad de crear un grupo de tareas en su Oficina con el mandato de colaborar con los componentes pertinentes de la Secretaría de las Naciones Unidas en la contratación y capacitación de personal cualificado de países en desarrollo para que se incorpore a la Oficina del Alto Comisionado;

7. Pide que el Secretario General tome las disposiciones necesarias para que se preste especial atención a la contratación de personal de los países en desarrollo, en particular de los Estados Miembros no representados, para proveer las vacantes existentes, así como para adicionales en la Oficina del Alto Comisionado, a fin de lograr una distribución geográfica equitativa, dando especial prioridad a la contratación para puestos de alto nivel y del cuadro orgánico, así como a la contratación de mujeres;

8. Pide nuevamente al Secretario General que, al firmar con los países acuerdos para proporcionar a la Oficina del Alto Comisionado los servicios de funcionarios subalternos del cuadro orgánico, inste a esos países a que procuren asignar recursos financieros adicionales para garantizar que personas de países en desarrollo puedan trabajar en calidad de funcionarios subalternos del cuadro orgánico, conforme al principio de la distribución geográfica equitativa; además, se debe establecer un mecanismo permanente en virtud del cual, por cada funcionario subalterno del cuadro orgánico de un país donante que se incorpore a la Oficina del Alto Comisionado, se incorpore otro funcionario subalterno del cuadro orgánico de un país en desarrollo;

9. Destaca la importancia de que todos los puestos, inclusive los correspondientes a nombramientos especiales para operaciones sobre el terreno, se anuncien públicamente, y de que se difundan descripciones pormenorizadas de las funciones en todos los Estados antes de llenarlos;

10. Pide a la Alta Comisionada que vele por que no se encomienden a los funcionarios subalternos del cuadro orgánico tareas políticamente delicadas en las que pueda ponerse en entredicho su imparcialidad;

11. Reafirma la importancia de garantizar el carácter universal, objetivo y no selectivo del examen de las cuestiones de derechos humanos y pide a la Alta Comisionada que siga velando por que en el desempeño de su mandato y en el de su Oficina se rija por estos principios;

12. Recalca que el personal de la Oficina del Alto Comisionado debe mantener su neutralidad y respetar plenamente la independencia de la labor de todos los mecanismos de la Comisión y de los órganos creados en virtud de tratados, a la vez que apoya su funcionamiento;

13. Pide a la Alta Comisionada que presente a la Comisión en su 58º período de sesiones un informe general sobre la aplicación de la presente resolución, que deberá incluir:

a) La composición del personal de la Oficina del Alto Comisionado, dividida en los cinco grupos regionales de las Naciones Unidas establecidos por la Asamblea General (Estados de África, Estados de Asia, Estados de América Latina y el Caribe, Estados de Europa occidental y otros Estados, y Estados de Europa oriental), con una indicación, entre otras cosas, de la categoría, la nacionalidad y el sexo del personal permanente y del que no sea de plantilla;

b) Las disposiciones tomadas para mejorar la situación actual y sus resultados;

c) Recomendaciones para mejorar la situación actual;

14. Señala a la atención de la Asamblea General la presente resolución en el contexto del examen del tema del programa sobre la gestión de los recursos humanos;

15. Decide examinar esta cuestión en su 58º período de sesiones en relación con el mismo tema del programa.

Anexo I

PERSONAL DE LA OFICINA DEL ALTO COMISIONADO DE
LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS

Distribución geográfica
(Número de puestos)

Grupos regionales	Puestos sujetos a distribución geográfica		Puestos no sujetos a distribución geográfica		Total	
	2000	2001	2000	2001	2000	2001
Estados de África	11	10	25	21	36	31
Estados de Asia	15	13	1	6	16	19
Estados de América Latina y el Caribe	8	9	8	10	16	19
Estados de Europa oriental	5	5	1	6	6	11
Estados de Europa occidental y otros Estados*	36	41	61	69	97	110
Total	75	78	96	112	171	190

* Incluidos Suiza e Israel.

Anexo II

PERSONAL DE LA OFICINA DEL ALTO COMISIONADO DE
LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS

Distribución geográfica
(En porcentaje)

Grupos regionales	Puestos sujetos a distribución geográfica		Puestos no sujetos a distribución geográfica		Total	
	2000	2001	2000	2001	2000	2001
Estados de África	15	13	26	19	21	16
Estados de Asia	20	17	1	5	9	10
Estados de América Latina y el Caribe	11	11	8	9	9	10
Estados de Europa oriental	6	6	1	5	3	6
Estados de Europa occidental y otros Estados*	48	53	63	62	56	58

* Incluidos Suiza e Israel.

79ª sesión,
25 de abril de 2001.

[Aprobada en votación nominal por 34 votos
contra 16 y 2 abstenciones. Véase cap. XVIII.]

2001/79. Arreglos regionales para la promoción
y protección de los derechos humanos

La Comisión de Derechos Humanos,

Recordando su resolución 1993/51, de 9 de marzo de 1993, y sus resoluciones posteriores relativas a los arreglos regionales para la promoción y protección de los derechos humanos,

Recordando también la resolución 32/127 de la Asamblea General, de 16 de diciembre de 1977, y sus resoluciones posteriores sobre esta cuestión,

Teniendo presentes las resoluciones pertinentes de la Comisión de Derechos Humanos sobre los servicios de asesoramiento y la cooperación técnica en materia de derechos humanos, incluida su resolución 2000/80, de 26 de abril de 2000, la más reciente sobre la cuestión,

Teniendo presentes también la Declaración y Programa de Acción de Viena aprobados en la Conferencia Mundial de Derechos Humanos en junio de 1993, en los que se reiteró, entre otras cosas, la necesidad de que se estudiara la posibilidad de establecer, donde aún no existiesen, arreglos regionales y subregionales para la promoción y protección de los derechos humanos,

Recordando que en la Conferencia Mundial se recomendó que se facilitaran más recursos a fin de afianzar los arreglos regionales para la promoción y protección de los derechos humanos en el marco del programa de cooperación técnica en materia de derechos humanos de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos,

Reafirmando que los arreglos regionales desempeñan un papel importante en la promoción y protección de los derechos humanos y deberían reforzar las normas universales de derechos humanos enunciadas en los instrumentos internacionales de derechos humanos y su protección,

Observando los progresos realizados hasta la fecha en la promoción y protección de los derechos humanos a nivel regional bajo los auspicios de las Naciones Unidas, los organismos especializados y las organizaciones intergubernamentales regionales,

Teniendo en cuenta que la cooperación entre las Naciones Unidas y los arreglos regionales en materia de derechos humanos sigue teniendo un carácter tanto sustantivo como de apoyo y que existen posibilidades de que aumente,

1. Toma nota con satisfacción del informe del Secretario General sobre arreglos regionales para la promoción y protección de los derechos humanos (E/CN.4/2001/97);
2. Observa con agrado la cooperación y asistencia que sigue prestando la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en el constante fortalecimiento de los actuales arreglos y mecanismos regionales para la promoción y protección de los derechos humanos, en particular mediante la cooperación técnica destinada al fomento de la capacidad nacional, la información pública y la educación, con miras a intercambiar información y experiencia en materia de derechos humanos;
3. Observa también con agrado a ese respecto la estrecha cooperación de la Oficina del Alto Comisionado en la organización de cursos de capacitación o cursos prácticos regionales y subregionales en la esfera de los derechos humanos, reuniones de expertos gubernamentales de alto nivel y conferencias regionales de instituciones nacionales dedicadas a los derechos humanos, con el propósito de crear una mayor comprensión en las regiones de las cuestiones relativas a la promoción y protección de los derechos humanos, mejorar los procedimientos y examinar los diversos sistemas de promoción y protección de las normas de derechos humanos universalmente aceptadas, así como de determinar los obstáculos que se oponen a la ratificación de los principales tratados internacionales de derechos humanos y las estrategias para superarlos;
4. Reconoce, por lo tanto, que los progresos en la promoción y protección de los derechos humanos dependerán fundamentalmente de la labor que se realice en los planos nacional y local y que el planteamiento regional debe suponer una cooperación y coordinación intensas con quienes participan en esa labor, teniendo también presente la importancia de la cooperación internacional;

5. Destaca la importancia del programa de cooperación técnica en materia de derechos humanos, reitera su llamamiento a todos los gobiernos para que consideren la posibilidad de aprovechar los medios que ofrece este programa de las Naciones Unidas de organizar cursos de información o capacitación en el plano nacional para funcionarios gubernamentales sobre la aplicación de las normas internacionales de derechos humanos y la experiencia recogida por los órganos internacionales competentes, y observa con satisfacción, a ese respecto, el establecimiento de proyectos de cooperación técnica con gobiernos de todas las regiones;

6. Acoge con satisfacción el aumento de los intercambios entre las Naciones Unidas y los órganos creados por las Naciones Unidas en virtud de los tratados relativos a los derechos humanos, por una parte, y las organizaciones intergubernamentales regionales, como el Consejo de Europa, la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, por la otra;

7. Acoge también con satisfacción el nombramiento por la Alta Comisionada de cuatro personalidades para que presten servicios como asesores regionales en la esfera de los derechos humanos, quienes desempeñarán un papel importante en la promoción y la acción en favor de los derechos humanos mediante la formulación de estrategias y el fomento de la colaboración en pro de los derechos humanos, facilitarán la coordinación de la cooperación técnica en la esfera de los derechos humanos a nivel regional y prestarán asistencia para la cooperación regional en general entre, por ejemplo, instituciones nacionales, órganos parlamentarios de derechos humanos, colegios de abogados y organizaciones no gubernamentales;

8. Recuerda, a ese respecto, la experiencia positiva adquirida con la presencia regional en el África meridional, que servirá de guía para establecer el planteamiento regional de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos;

9. Toma nota con interés del programa para África de la Oficina del Alto Comisionado y del objetivo de fortalecer la cooperación entre la Oficina y la Organización de la Unidad Africana a fin de examinar periódicamente las necesidades de las diversas subregiones en materia de derechos humanos;

10. Toma nota también con interés del creciente y valioso intercambio de experiencias nacionales concretas durante el noveno seminario sobre cooperación regional para la promoción y protección de los derechos humanos en la región de Asia y el Pacífico sobre la aplicación del Programa Marco de Teherán de Cooperación Técnica, que contribuye a la promoción y protección de los derechos humanos en la región;

11. Toma nota además con interés del Programa Marco de Quito de Cooperación Técnica en la esfera de los derechos humanos, que sirve de base para la estrategia regional de la Oficina del Alto Comisionado y tiene como objetivo el aumento de la capacidad nacional para la promoción de los derechos humanos en América Latina y el Caribe, y a este respecto acoge con satisfacción el establecimiento de una Red regional de instituciones nacionales en México, D.F., en noviembre de 2000;

12. Celebra que la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos siga colaborando con organizaciones regionales de Europa y el Asia central, en particular con miras a elaborar con carácter prioritario una estrategia regional contra la trata de personas;

13. Invita a los Estados de las zonas en que todavía no existen arreglos regionales en el ámbito de los derechos humanos a que consideren la posibilidad de concertar acuerdos con miras a establecer en sus regiones respectivas los mecanismos regionales apropiados para la promoción y protección de los derechos humanos;

14. Pide al Secretario General que, con arreglo a lo previsto en el programa 19 (Derechos humanos) del plan de mediano plazo para el período 1998–2001, siga aumentando los intercambios entre las Naciones Unidas y las organizaciones intergubernamentales regionales que se ocupan de los derechos humanos y proporcione recursos suficientes, con cargo al presupuesto ordinario de cooperación técnica, para las actividades de la Oficina del Alto Comisionado encaminadas a promover los arreglos regionales;

15. Pide a la Oficina del Alto Comisionado que siga prestando especial atención a las formas más apropiadas de prestar asistencia, en el marco del programa de cooperación técnica, a los países de las diversas regiones que la soliciten y que, cuando proceda, formule las recomendaciones del caso;

16. Invita al Secretario General a que, en el informe que presentará a la Asamblea General en su quincuagésimo séptimo período de sesiones, proporcione información acerca de los progresos realizados desde la aprobación de la Declaración y Programa de Acción de Viena en el incremento del intercambio de información y en la ampliación de la colaboración entre los órganos de las Naciones Unidas que se ocupan de los derechos humanos y las organizaciones regionales que actúan en la esfera de la promoción y protección de los derechos humanos;

17. Pide al Secretario General que le presente, en su 59º período de sesiones, un informe acerca de la situación de los arreglos regionales para la promoción y protección de los derechos humanos, que formule propuestas y recomendaciones concretas sobre los medios adecuados para fortalecer la cooperación entre las Naciones Unidas y los arreglos regionales en materia de derechos humanos, y que incluya en ese informe los resultados de las medidas adoptadas de conformidad con lo dispuesto en la presente resolución;

18. Decide seguir estudiando esta cuestión en su 59º período de sesiones.

79ª sesión,
25 de abril de 2001.
[Aprobada sin votación. Véase cap. XVIII.]

2001/80. Instituciones nacionales de promoción
y protección de los derechos humanos

La Comisión de Derechos Humanos,

Recordando las resoluciones pertinentes de la Asamblea General, en particular la resolución 48/134, de 20 de diciembre de 1993, y sus propias resoluciones relativas a las instituciones nacionales de promoción y protección de los derechos humanos,

Acogiendo con agrado el creciente interés mostrado en todo el mundo por la creación y el fortalecimiento de instituciones nacionales independientes y pluralistas para la promoción y protección de los derechos humanos,

Convencida del importante papel que desempeñan esas instituciones nacionales en la promoción y protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales y en la sensibilización y la creación de conciencia pública respecto de esos derechos y libertades,

Reconociendo que cada Estado tiene la prerrogativa de escoger, al crear una institución nacional, el marco jurídico más adecuado a sus necesidades y circunstancias particulares para conseguir que los derechos humanos se promuevan y protejan en el ámbito nacional de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos,

Recordando la Declaración y Programa de Acción de Viena (A/CONF.157/23), aprobados por la Conferencia Mundial de Derechos Humanos en junio de 1993, en los que se reafirmó el importante y constructivo papel que desempeñan las instituciones nacionales de derechos humanos y su papel en la reparación de las violaciones de los derechos humanos, la divulgación de información sobre esos derechos y la educación en materia de derechos humanos,

Tomando nota del Programa de Acción (véase A/CONF.157/NI/6) adoptado por las instituciones nacionales que se reunieron en Viena del 14 al 16 de junio de 1993 durante la Conferencia Mundial de Derechos Humanos, en el que se recomendó que se reforzaran las actividades y programas de las Naciones Unidas para responder a las solicitudes de asistencia de los Estados que desearan crear o fortalecer sus instituciones nacionales de promoción y protección de los derechos humanos,

Acogiendo con agrado el fortalecimiento de la cooperación internacional entre las instituciones nacionales de derechos humanos, en particular por medio del Comité de Coordinación Internacional creado por las instituciones nacionales,

Acogiendo también con agrado el fortalecimiento en todas las regiones de la cooperación regional entre las instituciones nacionales de derechos humanos, y entre las instituciones nacionales de derechos humanos y otros foros regionales de derechos humanos, y tomando nota a este respecto del establecimiento de la Red de instituciones nacionales de derechos humanos de las Américas, en noviembre de 2000,

Tomando nota de la importancia de una participación apropiada de las instituciones nacionales en las reuniones de las Naciones Unidas que se ocupan de los derechos humanos,

1. Reafirma la importancia de crear instituciones nacionales eficaces, independientes y pluralistas para la promoción y protección de los derechos humanos de conformidad con los Principios relativos al estatuto de las instituciones nacionales de promoción y protección de los

derechos humanos, que figuran en el anexo de la resolución 48/134 de la Asamblea General, de 20 de diciembre de 1993;

2. Alienta a los Estados a que establezcan tales instituciones, o a que las fortalezcan si ya existen, según se indica en la Declaración y Programa de Acción de Viena;

3. Reconoce que las instituciones nacionales pueden desempeñar un papel decisivo en la promoción y la garantía de la indivisibilidad y la interdependencia de todos los derechos humanos y exhorta a los Estados a que velen por que todos los derechos humanos queden debidamente comprendidos en los mandatos de las instituciones nacionales de defensa de los derechos humanos en el momento en que se establezcan;

4. Acoge con agrado las decisiones anunciadas por un creciente número de Estados de establecer instituciones de ese tipo, o de considerar su establecimiento, en particular la tendencia en favor del establecimiento de instituciones de ese tipo en los países desarrollados;

5. Toma nota con satisfacción de los esfuerzos de los Estados que han otorgado una mayor autonomía e independencia a sus instituciones nacionales, en particular asignándoles una función de investigación o reforzando esa función, y alienta a otros gobiernos a que consideren la posibilidad de tomar medidas semejantes;

6. Reconoce el importante y constructivo papel que pueden desempeñar los individuos, los grupos y las instituciones para promover y proteger mejor los derechos humanos, y alienta los esfuerzos que realizan las instituciones nacionales para establecer asociaciones e incrementar la cooperación con la sociedad civil;

7. Acoge con agrado la práctica de las instituciones nacionales establecidas de conformidad con los Principios relativos al estatuto de las instituciones nacionales de promoción y protección de los derechos humanos de participar de modo conveniente por derecho propio en las reuniones de la Comisión de Derechos Humanos y sus órganos subsidiarios;

8. Acoge también con agrado que las instituciones nacionales mantengan la práctica de convocar reuniones regionales en algunas regiones y de proponer su convocación en otras, y alienta a las instituciones nacionales a organizar reuniones similares con los gobiernos y las

organizaciones no gubernamentales de sus regiones, en colaboración con la Alta Comisionada para los Derechos Humanos;

9. Afirma el importante papel que tienen las instituciones nacionales de derechos humanos, en cooperación con otros mecanismos de promoción y protección de los derechos humanos, en la lucha contra la discriminación racial y las formas conexas de discriminación, así como en la protección y promoción de los derechos humanos de la mujer y los derechos de los grupos especialmente vulnerables, inclusive los niños y las personas con discapacidades, y en ese contexto:

a) Celebra la participación de las instituciones nacionales en los preparativos de la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia a nivel nacional, regional y mundial, y las insta a participar activamente en la Conferencia misma;

b) Celebra la participación de las instituciones nacionales en el examen quinquenal de la aplicación de la Plataforma de Acción aprobada en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer;

c) Alienta la participación de las instituciones nacionales en los preparativos a nivel nacional, regional y mundial del período extraordinario de sesiones de la Asamblea General sobre la infancia;

10. Reafirma el papel que corresponde a las instituciones nacionales, allí donde existen, como organismos apropiados, entre otras cosas, para la difusión de materiales sobre los derechos humanos y otras actividades de información pública durante el Decenio de las Naciones Unidas para la educación en la esfera de los derechos humanos (1995-2004);

11. Encomia a la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos por la prioridad que ha asignado al establecimiento y fortalecimiento de las instituciones nacionales de derechos humanos, incluso a través de la cooperación técnica, y exhorta a su Oficina a que siga reforzando su función de coordinación en esta esfera, y a que asigne los recursos necesarios a esa labor;

12. Expresa su reconocimiento a los gobiernos que han aportado recursos adicionales para el establecimiento y fortalecimiento de instituciones nacionales de derechos humanos;

13. Toma nota de la importante labor que realiza el Comité de Coordinación de las instituciones nacionales, en estrecha cooperación con la Oficina del Alto Comisionado, para determinar si esas instituciones son conformes a los Principios relativos al estatuto de las instituciones nacionales de promoción y protección de los derechos humanos y para ayudar a los gobiernos e instituciones nacionales que lo soliciten a dar seguimiento a las resoluciones y recomendaciones pertinentes relativas al fortalecimiento de las instituciones nacionales;

14. Pide al Secretario General que, con cargo a los recursos disponibles, siga prestando la asistencia necesaria para que el Comité de Coordinación se reúna durante los períodos de sesiones de la Comisión, bajo los auspicios de la Oficina del Alto Comisionado y con su cooperación;

15. Pide también al Secretario General que siga prestando la asistencia necesaria a las reuniones internacionales y regionales de instituciones nacionales con cargo a los recursos disponibles y al Fondo de las Naciones Unidas de Contribuciones Voluntarias para la Cooperación Técnica en materia de Derechos Humanos;

16. Pide al Secretario General que informe a la Comisión en su 58º período de sesiones sobre la aplicación de la presente resolución;

17. Decide seguir examinando esta cuestión en su 58º período de sesiones.

79ª sesión,
25 de abril de 2001.
[Aprobada sin votación. Véase cap. XVIII.]

2001/81. Asistencia a Somalia en materia de derechos humanos

La Comisión de Derechos Humanos,

Guiada por la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos y otros instrumentos de derechos humanos pertinentes,

Recordando su resolución 2000/81, de 26 de abril de 2000,

Teniendo presente la declaración del Presidente del Consejo de Seguridad sobre la situación en Somalia, de 11 de enero de 2001 (PRST/2001/1), el informe del Secretario General sobre la situación en Somalia, de 19 de diciembre de 2000 (S/2000/1211), la resolución 1265 (1999) del Consejo de Seguridad, de 17 de diciembre de 1999, relativa a la protección de los civiles durante los conflictos armados, el informe del Secretario General sobre la protección de la asistencia humanitaria a refugiados y otros que se encuentren en situaciones de conflicto (S/1998/883) y la resolución 54/192 de la Asamblea General, de 17 de diciembre de 1998, titulada "Seguridad del personal de asistencia humanitaria y protección del personal de las Naciones Unidas",

Recordando la resolución 751 (1992) del Consejo de Seguridad, de 24 de abril de 1992, relativa a la situación en Somalia,

Reconociendo que el pueblo de Somalia es el principal responsable del proceso de reconciliación nacional y es el que debe decidir libremente sus sistemas político, económico y social,

Tomando nota con agradecimiento de los esfuerzos en favor de la paz realizados por las Naciones Unidas, la Organización de la Unidad Africana, la Liga de los Estados Árabes, la Unión Europea, la Organización de la Conferencia Islámica, el Movimiento de los Países No Alineados, los países de la Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo y el Foro de Participantes en la Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo,

Expresando satisfacción por el hecho de que, pese a todas las dificultades, la población de las regiones septentrionales de Somalia sigue disfrutando de una relativa paz y estabilidad, así como del suministro de servicios básicos,

Considerando que la comunidad internacional no debe abandonar al pueblo de Somalia y que los derechos humanos deben incorporarse en el programa de conversaciones sobre el futuro de Somalia,

Elogiando la iniciativa adoptada por el Presidente de la República de Djibouti de fomentar la paz y la reconciliación nacional en Somalia al convocar la Conferencia de Arta que ha

conducido al establecimiento del Gobierno Nacional de Transición y la Asamblea Nacional de Transición, y tomando nota con agradecimiento del impulso facilitado al proceso de reconciliación nacional mediante la Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo,

Elogiando la labor llevada a cabo por grupos de la sociedad civil somalí y organizaciones no gubernamentales, entre ellas organizaciones humanitarias, en la esfera humanitaria, en sus esfuerzos por fomentar y proteger los derechos humanos,

Tomando nota con preocupación de que algunas partes de Somalia, incluidas las zonas de administración autónoma de "Somalilandia" y "Puntlandia", y algunos movimientos armados, no han participado hasta la fecha en el proceso de reconciliación nacional basado en la Conferencia de Arta,

Tomando también nota con preocupación de que la situación humanitaria y en materia de seguridad sigue siendo frágil en varias partes de Somalia, entre ellas Mogadishu,

Reconociendo los problemas masivos con que se enfrenta Somalia en relación con la asistencia inmediata, así como con la reconstrucción y el desarrollo,

Subrayando que el proceso de paz en Somalia tiene que continuar y llegar a su fin mediante el diálogo, y no recurriendo al empleo de la fuerza,

Agradeciendo la nota del Secretario General sobre la situación de los derechos humanos en Somalia (E/CN.4/2001/105),

1. Acoge con beneplácito:

a) El establecimiento del Gobierno Nacional de Transición y la Asamblea Nacional de Transición como resultado de la Conferencia de Paz de Arta que constituye un importante logro en el proceso de paz somalí;

b) El apoyo prestado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos mediante la designación del funcionario de derechos humanos para Somalia, establecido en Nairobi en el marco de la Oficina del Coordinador Residente de las Naciones Unidas y Coordinador de la Asistencia Humanitaria para Somalia, y expresa la

esperanza de que podrá seguir facilitando asistencia significativa al pueblo somalí mediante el cumplimiento de su mandato;

c) La integración de las cuestiones de derechos humanos en los programas de varios organismos de las Naciones Unidas;

d) La invitación del Consejo de Seguridad al Secretario General a que prepare una propuesta relativa a una misión de consolidación de la paz en Somalia cuando lo permita la situación en materia de seguridad, y el establecimiento de un fondo fiduciario para su realización;

2. Destaca la necesidad de que los derechos humanos formen parte de una futura misión de las Naciones Unidas de consolidación de la paz en Somalia;

3. Expresa la esperanza de que el Gobierno Nacional de Transición y la Asamblea Nacional de Transición contribuyan al restablecimiento del Estado, la preservación de la unidad nacional y la integridad territorial del país mediante el proceso de reconciliación nacional;

4. Expresa profunda preocupación por las informaciones sobre violaciones, ejecuciones sumarias y arbitrarias, tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes y violencia, en particular contra las mujeres y los niños, así como por la falta de un sistema judicial eficaz, indispensable para garantizar el derecho a un juicio imparcial de conformidad con las normas internacionales, y toma nota de la necesidad de que se lleve a cabo una investigación adecuada en toda Somalia con el fin de llevar a los autores ante los tribunales;

5. Condena:

a) Las actuales violaciones y atropellos generalizados de los derechos humanos y el derecho humanitario, en particular contra las minorías, las mujeres y los niños, así como el desplazamiento forzado de civiles;

b) Todas las violaciones del derecho internacional humanitario, en particular el reclutamiento forzado u obligatorio de niños para el conflicto armado y el empleo de estos niños por las milicias en el conflicto armado;

c) Todos los actos de violencia, tales como la toma de rehenes, los secuestros y los asesinatos, especialmente de personal de socorro humanitario y personal de organismos de las Naciones Unidas, en particular el reciente secuestro en Mogadishu de personal de las Naciones Unidas y personal de socorro humanitario de organizaciones no gubernamentales por parte de milicias pertenecientes a movimientos armados;

6. Insta encarecidamente al Gobierno Nacional de Transición, a la Asamblea Nacional de Transición y a todas las partes y administraciones de Somalia a que:

a) Creen las condiciones necesarias para incorporar al proceso de reconciliación a quienes no participaron en la Conferencia de Arta, con el objetivo de ampliar y profundizar el proceso de reconciliación nacional;

b) Respeten los derechos humanos y las normas de derecho humanitario establecidas en los instrumentos internacionales, en particular las relativas a los conflictos armados internos;

c) Apoyen el restablecimiento del estado de derecho en todo el país, en particular mediante la aplicación de las normas internacionalmente reconocidas en materia de justicia penal;

d) Protejan y faciliten la labor del personal de las Naciones Unidas, el personal de socorro humanitario y los representantes de las organizaciones no gubernamentales y de los medios de comunicación internacionales, y garanticen a todas las personas que participan en la acción humanitaria la libertad de circulación en todo el país y el acceso seguro y libre de obstáculos a los civiles que requieren protección y asistencia humanitaria;

7. Exhorta:

a) Al Gobierno Nacional de Transición y a la Asamblea Nacional de Transición, a que continúen, con un espíritu de diálogo constructivo, el proceso de lograr la participación de todos los grupos del país, incluidas las zonas de administración autónoma del nordeste y el noroeste ("Somalilandia" y "Puntlandia"), con miras a completar el proceso de reconciliación nacional y preparar la aplicación de acuerdos permanentes de gestión pública mediante el proceso democrático;

- b) A las autoridades de las zonas de administración autónoma de "Somalilandia" y "Puntlandia", a que establezcan relaciones constructivas con las instituciones que surgen del proceso de Arta;
- c) A todos los grupos, en particular a los movimientos armados, a que apoyen y participen en los esfuerzos de desmovilización llevados a cabo por el Gobierno Nacional de Transición y la Asamblea Nacional de Transición;
- d) A todos los Estados, a que se abstengan de toda intervención militar en la situación interna de Somalia y a que cumplan el embargo de armas;
- e) A las organizaciones subregionales, regionales e internacionales y a los países interesados, a que continúen e intensifiquen sus esfuerzos coordinados para facilitar el proceso de reconciliación nacional en Somalia, consciente de que la coexistencia pacífica de todas las partes y grupos es una base fundamental para el respeto de los derechos humanos;
- f) A los distintos países donantes, a las organizaciones internacionales y a las organizaciones no gubernamentales, a que integren aún más los principios y objetivos de derechos humanos en la labor humanitaria y de desarrollo que realizan en Somalia, y a que cooperen con el futuro experto independiente;
- g) A la comunidad internacional, a que siga proporcionando asistencia creciente en respuesta a los llamamientos de las Naciones Unidas en favor de la labor de socorro, rehabilitación y reconstrucción en todas las regiones de Somalia, incluida la labor destinada a fortalecer la sociedad civil, alentar la gestión pública y el restablecimiento del estado de derecho, y a que apoyen las actividades de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos referentes a Somalia;
- h) A todos los Estados que tengan información sobre casos de violaciones de las disposiciones de la resolución 733 (1992) del Consejo de Seguridad, de 23 de enero de 1992, relativa al embargo obligatorio de armas contra Somalia, a que proporcionen esa información al Comité del Consejo de Seguridad establecido en cumplimiento de la resolución 751 (1992) sobre Somalia, con miras a respaldar la labor del Comité;

i) A las Naciones Unidas, sus Estados Miembros y organismos especializados, a las organizaciones no gubernamentales y a las instituciones de Bretton Woods, a que proporcionen ayuda al Gobierno Nacional de Transición, a la Asamblea Nacional de Transición y a las regiones que han establecido la paz y la estabilidad mediante la administración autónoma, a hacer frente a los problemas masivos con que se enfrenta Somalia en lo que respecta a la reconstrucción y el desarrollo y a la necesidad inmediata de asistencia urgente, en especial en la esfera de los derechos humanos, la desmovilización (con atención especial a la lucha contra el VIH/SIDA y otras enfermedades transmisibles), el desarme y la rehabilitación de las infraestructuras básicas;

8. Encomia la labor realizada por la anterior experta independiente y pide al Secretario General de las Naciones Unidas que nombre un nuevo experto independiente;

9. Invita a los gobiernos y a las organizaciones que estén en condiciones de hacerlo a que respondan favorablemente a las solicitudes de asistencia del Secretario General para la aplicación de la presente resolución;

10. Pide a la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos que tome las disposiciones necesarias para que la presente resolución, acompañada de una nota explicativa de los antecedentes, se traduzca al idioma somalí, y el funcionario de derechos humanos para Somalia establecido en Nairobi la difunda ampliamente en el país;

11. Decide:

a) Prorrogar por un año el mandato del experto independiente sobre la situación de los derechos humanos en Somalia y pide que el futuro experto independiente informe al respecto a la Comisión de Derechos Humanos en su 58º período de sesiones;

b) Pedir al Secretario General que también siga proporcionando al futuro experto independiente toda la asistencia necesaria para el cumplimiento de su mandato y que proporcione recursos suficientes, con cargo a los recursos generales de las Naciones Unidas, para financiar las actividades que realice el experto (o la experta) independiente y la Alta Comisionada a fin de prestar servicios de asesoramiento y cooperación técnica;

c) Seguir examinando esta cuestión en su 58º período de sesiones, en relación con el mismo tema del programa.

79ª sesión,
25 de abril de 2001.
[Aprobada sin votación. Véase cap. XIX.]

2001/82. Situación de los derechos humanos en Camboya

La Comisión de Derechos Humanos,

Guiada por los propósitos y principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de Derechos Humanos y los Pactos Internacionales de Derechos Humanos,

Recordando el Acuerdo sobre un arreglo político amplio del conflicto de Camboya, firmado en París el 23 de octubre de 1991, y en particular su parte III, relativa a los derechos humanos,

Teniendo presente su resolución 2000/79, de 26 de abril de 2000, la resolución 55/95 de la Asamblea General, de 4 de diciembre de 2000, y las resoluciones anteriores pertinentes,

Reconociendo que la trágica historia de Camboya requiere que se adopten medidas especiales para garantizar la protección de los derechos humanos de toda la población camboyana e impedir que se vuelva a las políticas y prácticas anteriores, tal como se estipuló en el Acuerdo firmado en París el 23 de octubre de 1991,

Deseando que la comunidad internacional siga respondiendo en forma positiva a fin de contribuir a los esfuerzos destinados a investigar la trágica historia de Camboya, y en particular la responsabilidad por los crímenes internacionales cometidos en el pasado, como los actos de genocidio y crímenes de lesa humanidad, durante el régimen de Kampuchea Democrática, de 1975 a 1979,

Teniendo presente la solicitud de asistencia presentada en junio de 1997 por las autoridades camboyanas para responder a las graves violaciones del derecho internacional y del derecho camboyano cometidas en el pasado, la carta de fecha 15 de marzo de 1999 dirigida al

Presidente de la Asamblea General y al Presidente del Consejo de Seguridad por el Secretario General (A/53/850-S/1999/231) y el informe del Grupo de Expertos nombrado por el Secretario General anexo a la misma, así como las conversaciones celebradas entre el Gobierno de Camboya y la Secretaría de las Naciones Unidas sobre las normas y los procedimientos para procesar a los dirigentes del Khmer Rouge que tuvieron mayor responsabilidad en las violaciones más graves de los derechos humanos cometidas en los años 1975 a 1979,

Reconociendo el legítimo interés del Gobierno y el pueblo de Camboya en la observación de los principios de justicia y reconciliación nacional internacionalmente aceptados,

Reconociendo también que la responsabilidad de los autores de graves violaciones de los derechos humanos es uno de los elementos fundamentales de todo resarcimiento efectivo de las víctimas de las violaciones de los derechos humanos y un factor clave para garantizar un sistema judicial imparcial y equitativo, y, en última instancia, la reconciliación y estabilidad dentro de un Estado,

Celebrando el papel que sigue desempeñando la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en la promoción y protección de los derechos humanos en Camboya,

I. APOYO DE LAS NACIONES UNIDAS Y COOPERACIÓN CON ÉSTAS

1. Pide al Secretario General que, por intermedio de su Representante Especial encargado de examinar la situación de los derechos humanos en Camboya y en colaboración con la representación de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Camboya, preste asistencia al Gobierno de ese país para garantizar la protección de los derechos humanos de todos sus habitantes y asegure recursos suficientes para seguir manteniendo en Camboya la presencia operacional de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y para que el Representante Especial pueda seguir desempeñando eficazmente sus funciones;

2. Acoge con satisfacción el informe del Secretario General sobre la función y los logros de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos

en la prestación de asistencia al Gobierno y al pueblo de Camboya para la promoción y protección de los derechos humanos (E/CN.4/2001/102);

3. También acoge con satisfacción el informe del Representante Especial del Secretario General encargado de examinar la situación de los derechos humanos en Camboya (E/CN.4/2001/103), felicita al Gobierno de Camboya por su apertura y espíritu de cooperación durante las visitas del Representante Especial y lo alienta a que siga cooperando en todos los niveles de gobierno, y apoya el llamamiento formulado por el Representante Especial para que se aumente la asistencia internacional a Camboya y se siga tratando de reducir la pobreza;

4. Pide al Gobierno de Camboya y a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos que firmen sin más demora el memorando de entendimiento para la prórroga del acuerdo sobre el cumplimiento del mandato de la oficina de Camboya después de marzo de 2000, toma nota con pesar de las dilaciones que se han producido hasta ahora en el proceso y alienta al Gobierno de Camboya a que siga cooperando con la oficina;

5. Toma nota con reconocimiento de que el Secretario General ha utilizado el Fondo Fiduciario de las Naciones Unidas para un programa de enseñanza de los derechos humanos en Camboya a fin de financiar el programa de actividades de la representación de la Oficina del Alto Comisionado en Camboya, expuesto en las resoluciones de la Asamblea General y de la Comisión, e invita a los gobiernos, las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales, las fundaciones y los particulares a que consideren la posibilidad de contribuir al Fondo Fiduciario;

II. REFORMA ADMINISTRATIVA, LEGISLATIVA Y JUDICIAL

6. Observa con preocupación los persistentes problemas relacionados con el imperio de la ley y el funcionamiento del poder judicial, como la corrupción, incluida la injerencia del poder ejecutivo en la independencia de la judicatura, celebra el constante empeño del Gobierno en reformar el poder judicial, elogia los esfuerzos que está haciendo para preparar los códigos y leyes que constituyen los elementos fundamentales del marco legal básico, e insta al Gobierno a que siga adoptando las medidas necesarias para promover la independencia e imparcialidad del Consejo Supremo de la Magistratura y del sistema judicial en su conjunto;

7. Insta al Gobierno de Camboya a seguir tomando las medidas necesarias para establecer un sistema judicial independiente, imparcial y eficaz, y especialmente la pronta aprobación del proyecto de estatuto de los jueces, de un código penal y de un código de procedimiento penal, así como de un código civil y un código de procedimiento civil nuevos, la reforma de la administración de justicia y el mejoramiento de la formación de los jueces y abogados, y hace un llamamiento a la comunidad internacional para que preste asistencia al Gobierno con ese objeto;

8. Acoge con satisfacción la aprobación del plan de acción relativo al buen gobierno por el Gobierno de Camboya, recomienda que se empiece a ejecutar pronto y hace un llamamiento a la comunidad internacional para que preste asistencia al Gobierno en sus esfuerzos para aplicarlo;

9. Expresa su profunda preocupación por la persistencia de la situación de impunidad en Camboya, reconoce el empeño y los esfuerzos del Gobierno de Camboya para responder a ese problema, lo exhorta a que adopte nuevas medidas, con carácter absolutamente prioritario, para investigar urgentemente y enjuiciar, con las debidas garantías procesales y de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos, a todos los que hayan cometido delitos graves, como violaciones de los derechos humanos, y alienta a la comunidad internacional a que suministre medios, como asistencia técnica o personal especializado, para ayudar al Gobierno a cumplir su compromiso de enjuiciar más eficazmente a los autores;

10. Observa con interés los esfuerzos del Gobierno de Camboya en lo que respecta al examen de la reducción de la policía y las fuerzas armadas y a su voluntad expresa de hacerlo, celebra la aprobación del informe oficial sobre defensa nacional, alienta al Gobierno a que lo aplique y siga llevando a cabo una reforma eficaz, especialmente prosiguiendo la reducción iniciada, con miras a asegurar la profesionalidad e imparcialidad de la policía y las fuerzas armadas, e invita a la comunidad internacional a que continúe prestando asistencia al Gobierno con ese objeto;

11. Celebra la aprobación de la Ley de administración de los municipios/Sangkat y de la Ley sobre la elección de los consejos de los municipios/Sangkat, reconoce y destaca la importancia de que la Comisión Electoral Nacional funcione de manera independiente y

transparente, insta al Gobierno de Camboya a que garantice la libertad y limpieza en las elecciones municipales previstas para el 3 de febrero de 2002 y alienta a la comunidad internacional a que preste asistencia al Gobierno con ese objeto;

12. Toma nota con profunda preocupación de las condiciones existentes en las cárceles de Camboya, observa con interés algunos esfuerzos importantes destinados a mejorar el sistema penitenciario, recomienda que se siga prestando asistencia internacional para mejorar las condiciones materiales de encarcelamiento y exhorta al Gobierno de Camboya a que adopte nuevas medidas para mejorar las condiciones existentes en las cárceles, especialmente con miras a resolver el problema del hacinamiento, garantizando un nivel mínimo de alimentación y atención sanitaria y satisfaciendo las necesidades especiales de las mujeres y los niños, incluso reforzando la función de coordinación del Departamento de Sanidad Penitenciaria con el Ministerio de Salud, las autoridades provinciales y las organizaciones no gubernamentales que trabajan en esa esfera;

III. VIOLACIONES DE LOS DERECHOS HUMANOS Y VIOLENCIA

13. Expresa su profunda preocupación por las persistentes violaciones de los derechos humanos, como las torturas, la excesiva duración de la detención preventiva, la violación de los derechos laborales y los desalojos forzosos, así como por la evidente falta de protección contra los linchamientos descrita en el informe del Representante Especial, y toma nota de que el Gobierno de Camboya ha hecho algunos progresos en la solución de esos problemas;

14. Toma nota con preocupación de la persistencia de los actos de violencia e intimidación relacionados con la actividad política descritos en el informe del Representante Especial, celebra las investigaciones llevadas a cabo por las autoridades camboyanas en algunos casos de violencia e insta al Gobierno a que realice nuevas investigaciones, de acuerdo con los compromisos que ha adquirido, y adopte medidas apropiadas para impedir los actos de violencia e intimidación relacionados con la actividad política en el futuro, especialmente en el período anterior a las elecciones municipales;

15. Insta a que se ponga fin a la violencia racial contra las minorías étnicas y a su denigración, en particular en el caso de las personas de origen étnico vietnamita, e insta además

al Gobierno de Camboya a que adopte todas las medidas necesarias para impedir esa violencia y cumpla las obligaciones que ha contraído como Parte en la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, entre otras cosas tratando de obtener asistencia técnica;

IV. EL TRIBUNAL PARA EL KHMER ROUGE

16. Reafirma que las violaciones más graves de los derechos humanos en la historia reciente de Camboya han sido perpetradas por el Khmer Rouge, celebra su desintegración definitiva, que ha allanado el camino para el restablecimiento de la paz, la estabilidad y la reconciliación nacional en Camboya y permitido investigar y procesar a sus dirigentes, y toma nota con interés de las medidas adoptadas por el Gobierno de Camboya para entregar a la justicia a los dirigentes del Khmer Rouge que fueron los principales responsables de las violaciones más graves de los derechos humanos;

17. Acoge con beneplácito los avances logrados en el Parlamento para aprobar una ley sobre la creación de salas especiales en los tribunales de Camboya para el enjuiciamiento de los crímenes cometidos en el período de la Kampuchea Democrática, insta al Gobierno de Camboya a finalizar sin demora los trámites aún pendientes para el establecimiento de dichas salas y su entrada en funcionamiento, hace un firme llamamiento al Gobierno para que vele por que se haga rendir cuentas a los dirigentes Khmer Rouge de conformidad con las normas internacionales de justicia y equidad y con las debidas garantías procesales, alienta al Gobierno a seguir cooperando con las Naciones Unidas en esta materia y acoge con agrado los esfuerzos de la Secretaría y la comunidad internacional por asistir al Gobierno con ese propósito;

V. DERECHOS LABORALES Y PROTECCIÓN DE LAS MUJERES Y LOS NIÑOS

18. Acoge con agrado la creación de una comisión interministerial encargada de atender a las reclamaciones laborales y las medidas adoptadas por el Gobierno de Camboya para organizar un equipo de vigilancia laboral, y toma nota con interés de los programas de formación sobre el Código de Trabajo y los derechos laborales en Camboya para inspectores oficiales del trabajo;

19. Acoge también con agrado los avances logrados en el plan de acción quinquenal del Gobierno de Camboya, en particular por el Ministerio de Asuntos de la Mujer y de los Veteranos, para mejorar la situación de la mujer, e insta al Gobierno de Camboya a seguir adoptando medidas apropiadas para eliminar toda forma de discriminación contra la mujer y combatir todo tipo de violencia contra ella, entre otras cosas la trata y la explotación sexual, y a tomar todas las medidas necesarias para cumplir las obligaciones que le incumben como Parte en la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, incluso pidiendo asistencia técnica;

20. Pide al Gobierno de Camboya que siga tratando de resolver los problemas de la trata y la explotación sexual de los niños, de mejorar sus condiciones de salud y su acceso a la educación, de proporcionar y promover un registro de nacimientos gratuito y accesible y de establecer un sistema adecuado de justicia de menores, encomia la labor del Consejo Nacional de la Infancia orientada a la organización de una reunión técnica para el cumplimiento de las recomendaciones finales del Comité de los Derechos del Niño, e invita a la comunidad internacional a seguir asistiendo al Gobierno con ese propósito;

21. Toma nota con profunda preocupación del problema del trabajo infantil en sus peores formas; exhorta al Gobierno de Camboya a que garantice condiciones adecuadas de sanidad y seguridad a los niños y prohíba, en particular, las peores formas de trabajo infantil, invita a la Organización Internacional del Trabajo a que siga prestando la asistencia necesaria en ese sentido y alienta al Gobierno de Camboya a que considere la posibilidad de ratificar el Convenio sobre la prohibición de las peores formas de trabajo infantil y la acción inmediata para su eliminación (Convenio N° 182), de la Organización Internacional del Trabajo;

VI. PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS

22. Reconoce la importancia de la educación y la formación en derechos humanos en Camboya, encomia los esfuerzos del Gobierno de Camboya, de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y de la sociedad civil en ese terreno, alienta a seguir reforzando y difundiendo esos programas e invita a la comunidad internacional a seguir asistiendo en esa labor;

23. Encomia la función esencial y valiosa que desempeñan las organizaciones no gubernamentales en Camboya, entre otras cosas en el desarrollo de la sociedad civil, y alienta al Gobierno de Camboya a velar por la protección de dichas organizaciones de derechos humanos y de su personal y a seguir colaborando estrechamente y de forma cooperativa con las organizaciones no gubernamentales en la tarea de fortalecer y defender los derechos humanos en Camboya, en particular en el período previo a las elecciones municipales;

24. Toma nota con interés de las actividades realizadas por el Comité de Derechos Humanos del Gobierno de Camboya, la Comisión de Derechos Humanos y Recepción de Denuncias de la Asamblea Nacional y la Comisión de Derechos Humanos y Recepción de Denuncias del Senado, y destaca la importancia de seguir promoviendo la confianza en esas instituciones;

25. Alienta al Gobierno de Camboya en sus esfuerzos por crear un mecanismo nacional independiente para la promoción y protección de los derechos humanos, que debería basarse en los Principios relativos al estatuto de las instituciones nacionales de promoción y protección de los derechos humanos, conocidos como Principios de París, en estrecha colaboración con la sociedad civil, y pide a la Oficina del Alto Comisionado que siga prestando asesoramiento y cooperación técnica en esa tarea;

26. Pide al Gobierno de Camboya que ponga en práctica las recomendaciones hechas por los órganos creados en virtud de tratados internacionales de derechos humanos con respecto a los informes presentados por el Gobierno de Camboya, exhorta al Gobierno de Camboya a que cumpla las obligaciones de presentar informes que le corresponden en virtud de todos los instrumentos internacionales de derechos humanos en los que es Parte, y pide a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Camboya que siga prestando asistencia a ese respecto;

VII. MINAS TERRESTRES Y ARMAS PEQUEÑAS

27. Expresa profunda preocupación por las consecuencias devastadoras y los efectos destabilizadores que tiene para la sociedad camboyana la utilización de minas terrestres antipersonal, alienta al Gobierno de Camboya a que siga apoyando y ejecutando actividades de

remoción de minas, de asistencia a las víctimas y de toma de conciencia respecto del problema, y encomia a los países donantes y a otros actores de la comunidad internacional por sus contribuciones y su asistencia en las actividades relativas a las minas;

28. Expresa preocupación por el elevado número de armas de pequeño calibre que hay en manos de civiles y encomia los intentos del Gobierno de Camboya, en cooperación con la comunidad internacional, por controlar su proliferación y reducir su número y alienta al Gobierno a colaborar en las iniciativas regionales y en la labor de las Naciones Unidas para reducir la circulación de las armas de pequeño calibre ilícitas;

VIII. CONCLUSIÓN

29. Pide al Secretario General que informe a la Comisión en su 58º período de sesiones sobre el papel y los logros de la Oficina del Alto Comisionado en lo concerniente a la prestación de asistencia al Gobierno y al pueblo de Camboya para la promoción y protección de los derechos humanos y sobre las recomendaciones formuladas por el Representante Especial respecto de las cuestiones comprendidas en su mandato;

30. Decide seguir examinando la situación de los derechos humanos en Camboya en su 58º período de sesiones en relación con el tema del programa titulado "Servicios de asesoramiento y cooperación técnica en materia de derechos humanos".

79ª sesión,
25 de abril de 2001.
[Aprobada sin votación. Véase cap. XIX.]